

Valparaíso, veintiséis de Agosto de dos mil veinte.

**Vistos:**

Se ha ordenado instruir sumario en estos autos criminales Rol N° 144.132-2013, originados por querrela criminal interpuesta por Oscar Ibaceta Jorquera a fojas 1, con el objeto de conocer de los delitos de secuestro y tortura por él denunciados, y establecer la responsabilidad que en estos ilícitos le cabe a los acusados **Ricardo Alejandro Riesco Cornejo**, 73 años, chileno, casado, natural de Viña del Mar, nacido el 14 de diciembre de 1946, Jubilado de la Armada como Capitán de Navío, cédula de identidad N° 5.015.683-4, domiciliado en La Joya N° 425, Depto. 302, Reñaca, Viña del Mar, cuyo extracto de filiación se encuentra a fojas 693 de estos autos; **Juan de Dios Reyes Basaur**, 86 años, chileno, casado, natural de Penco, nacido el 28 de abril de 1933, Jubilado de la Armada como Suboficial Mayor, cédula de identidad N° 2.780.379-2, domiciliado en pasaje The Butterfly N° 47, Peñablanca, cuyo extracto de filiación se encuentra a fojas 658 de estos autos; **Valentín Evaristo Riquelme Villalobos**, 89 años, chileno, casado, natural de Curanilahue, nacido el 30 de julio de 1930, Jubilado de la Armada como Suboficial Mayor, cédula de identidad N° 2.838.052-6, domiciliado en pasaje Isla de Pascua N° 1088, conjunto residencial Victoria, Villa Alemana, cuyo extracto de filiación se encuentra a fojas 650 de estos autos; **Alejo Esparza Martínez**, 81 años, chileno, casado, natural de Concepción, nacido el 17 de julio de 1938, Jubilado de la Armada como Suboficial Mayor, cédula de identidad N° 4.203.823-7, domiciliado en Las Esmeraldas N° 2411, Población Colinas de oro, Quilpué, cuyo extracto de filiación se encuentra a fojas 665 de estos autos; **Eduardo Mauricio Núñez Contreras**, 88 años, chileno, casado, natural de Concepción, nacido el 10 de noviembre de 1931, Jubilado de la Armada como Suboficial Mayor, cédula de identidad N° 3.133.538-8, domiciliado en Puerto Zenteno N° 620, Canal Beagle, Viña del

Mar, cuyo extracto de filiación se encuentra a fojas 672 de estos autos; **Héctor Vicente Santibáñez Obreque**, 81 años, chileno, casado, natural de Concepción, nacido el 19 de agosto de 1938, Jubilado de la Armada como Capitán de Fragata, cédula de identidad N° 3.997.271-9, domiciliado en San Enrique N° 478, Cerro Alegre, Valparaíso, cuyo extracto de filiación se encuentra a fojas 668 de estos autos; **Jaime Segundo Lazo Pérez**, 87 años, chileno, casado, natural de Valparaíso, nacido el 17 de noviembre de 1932, jubilado de la Armada como Suboficial Mayor, cédula de identidad N° 3.137.489-8, domiciliado en Pasaje Isla Chiloé N° 417, Población Canal Beagle, Viña del Mar, cuyo extracto de filiación se encuentra a fojas 629 de estos autos; y **Guillermo Tomás Morera Hierro**, 70 años, chileno, casado, natural de Valparaíso, nacido el 07 de marzo de 1950, jubilado, cédula de identidad N° 5.771.663-0, domiciliado en Jardines de Andalién, casa 81, Concepción, cuyo extracto de filiación se encuentra a fojas 627 de estos autos.

La causa se inicia por querrela criminal de Oscar Ibaceta Jorquera, por los hechos ocurridos a su persona en el mes de febrero de 1974 en la comuna de Valparaíso, en contra de quienes resulten responsables, por los delitos de secuestro y tortura, y que rola a fojas 1 y siguientes.

A fojas 512 rola resolución de fecha 18 de abril de 2017, por la cual este Ministro somete a proceso a Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Juan Orlando Jorquera Terrazas, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Alejo Esparza Martínez, Eduardo Mauricio Núñez Contreras, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Jaime Segundo Lazo Pérez y Guillermo Tomás Morera Hierro, como autores de los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos en la persona de Oscar Ibaceta Jorquera, hechos que ocurren en el mes de Febrero de 1974, oportunidad en que efectivos de la Armada proceden a detener a la víctima, quien tenía a esa fecha 14 años de edad, quien acude a la Academia de Guerra Naval

ante una citación dejada en su domicilio. En ese recinto la víctima es objeto de apremios físicos y psicológicos, los que se traducen en amenazas, a su vida e integridad física y la de sus amigos, simulacros de fusilamiento, privación del sueño y de la satisfacción de necesidades fisiológicas, golpes de pie y puño y aplicación de corriente eléctrica en sus manos e ingle, permaneciendo en esa situación durante 20 días aproximadamente. Que los hechos recién reseñados están previstos y sancionados en los artículos 141 inciso 3° y 150 número 1 inciso 2°, respectivamente, del Código Penal, vigentes a la época de ocurrencia de ellos.

A fojas 697 se declaró cerrado el sumario.

A fojas 700 se dicta acusación en contra de Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Juan Orlando Jorquera Terrazas, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Alejo Esparza Martínez, Eduardo Mauricio Núñez Contreras, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Jaime Segundo Lazo Pérez y Guillermo Tomás Morera Hierro, como autores de los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos en la persona de Oscar Ibaceta Jorquera, respecto de los hechos ya reseñados en el auto de procesamiento, previstos y sancionados en los artículos 141 inciso 3° y 150 número 1 inciso 2°, respectivamente, del Código Penal.

A fojas 706 el querellante Oscar Ibaceta Jorquera acusa particularmente a Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Juan Orlando Jorquera Terrazas, Alejo Esparza Martínez, Eduardo Mauricio Núñez Contreras, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Jaime Segundo Lazo Pérez y Guillermo Tomás Morera Hierro, y deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, por la suma total de \$800.000.000 (ochocientos millones de pesos).

A fojas 724 el Abogado Procurador Fiscal (S) de Valparaíso, don Luis Díaz Aracena, por el demandado civil FISCO de Chile, contesta la demanda civil.

A fojas 767 el abogado Fernando Dumay Burns, por los acusados Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Juan Orlando Jorquera Terrazas, Alejo Esparza Martínez, Eduardo Mauricio Núñez Contreras, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Jaime Segundo Lazo Pérez y Guillermo Tomás Morera Hierro, opone excepciones de previo y especial pronunciamiento, de lo cual se otorga traslado al querellante, y contesta acusación fiscal y acusación particular.

A fojas 803, el querellante contesta el traslado a las excepciones de previo y especial pronunciamiento opuestas por la defensa, teniéndose por contestado el traslado a fojas 805, dejándose la resolución de dichas excepciones para la definitiva.

A fojas 820 se recibe la causa a prueba por el término legal y se rinde la que consta en autos.

A fojas 867 se pasaron los autos para los efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal y a fojas 868 se decretan medidas para mejor resolver, las que son cumplidas a fojas 875 y siguientes.

A fojas 871 se decreta el sobreseimiento parcial y definitivo de Juan Orlando Jorquera Terrazas, por haberse extinguido su responsabilidad penal en conformidad a lo dispuesto en los artículos 407 y 408 N° 5 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 93 N° 1 del Código Penal.

A fojas                    se traen los autos para fallo.

#### **CONSIDERANDO:**

##### **A.- En cuanto a las excepciones de previo y especial pronunciamiento:**

**Primero:** Que en lo principal del escrito de fojas 767, la defensa de los acusados Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos,

Juan Orlando Jorquera Terrazas, Alejo Esparza Martínez, Eduardo Mauricio Núñez Contreras, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Jaime Segundo Lazo Pérez y Guillermo Tomás Morera Hierro opone como primera excepción de previo y especial pronunciamiento y signada con el I, la declinatoria de Jurisdicción, lo que funda en el hecho de que el conocimiento de estas causas, tuvo su origen en la designación que se hiciera mediante el Auto Acordado que contiene el Acta 81 de 2010 y sus modificaciones posteriores que se han referido principalmente a la designación de nuevos ministros en reemplazo de otros y a una redistribución de las mismas. Concluye que ante los delitos de secuestro y detención ilegal, quien hoy instruye la causa no es un juez de la república, es un ministro de un tribunal superior de justicia que por sí mismo no tiene facultades para actuar como tal, pues no se ha alterado la naturaleza y finalidad de la designación. Es por ello que el presente juicio no se ha seguido ante un tribunal establecido con anterioridad a la comisión del delito, transformándose en una comisión especial y vulnerándose las normas constitucionales y legales que menciona. Agrega que el acta 81-2010, establece dos límites a las actuaciones: un límite temporal, en el sentido de que la visita se circunscribe a un período específico, o sea a los hechos cuyo principio de ejecución haya tenido lugar entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1990. El segundo límite en cuanto a los delitos que puede investigar, se refiere al homicidio y a la desaparición forzada de personas. Como en el presente caso no se conoce ninguno de estos delitos, el juez es absolutamente incompetente para conocer de la presente causa, declinando en su competencia.

**Segundo:** Que, como segunda excepción de previo y especial pronunciamiento promovida por esta defensa y signada con el número II, la amnistía, basándose en lo establecido al efecto en el DL 2191 de 1978 y que concede amnistía a las

personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan participado en hechos delictuosos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, por lo que dicho decreto ley produce pleno efecto respecto de sus representados.

**Tercero:** Que, por último, plantea como tercera excepción de previo y especial pronunciamiento promovida por esta defensa y signada bajo el N° III, la prescripción, pues las acciones referidas a los sucesos investigados, se encuentran absolutamente prescritas, al haber transcurrido con creces el plazo de 15 años que se exige, todo lo cual se desprende del artículo 94 del Código Penal, haciendo referencia a los tratados internacionales sobre el tema, a los principios de legalidad y reserva que se encuentran presentes, a la imprescriptibilidad de estos crímenes, a los Convenios de Ginebra y a la vigencia de la Ley 20.357.

**Cuarto:** Que a fojas 803, la querellante contestó las excepciones de previo y especial pronunciamiento a que se refieren los considerandos anteriores, solicitando que ellas sean rechazadas por las razones que se indican en el respectivo escrito.

**Quinto:** Que respecto a la primera excepción de previo y especial pronunciamiento, esto es, declinatoria de jurisdicción, ella debe ser desestimada en base a las siguientes argumentaciones:

En primer lugar, por cuanto, si bien el encargo del suscrito emana de la ya mencionada Acta 81 del 2010, dictada de la Excma. Corte Suprema, la que indica que los delitos que deberán ser investigados y resueltos son los de homicidio y desaparición forzada de personas, ello no es excluyente de las figuras que se conocen en el presente proceso, en concreto, secuestro con grave daño y aplicación de tormentos, toda vez que todos ellos cabe considerarlos como crímenes de lesa humanidad, lo que implica que ellos se encuentran en una

situación igual respecto tanto del tribunal que los conoce como de la extensión de las figuras penales que son objeto de la investigación y fallo, conforme a la normativa que ha dictado el Alto Tribunal, no haciendo distingo alguno respecto de estas situaciones que lógicamente fueron apareciendo en el tiempo.

En segundo lugar, porque resulta razonable que las situaciones descritas en el Acta 81 del 2010 estén relacionadas con las que corresponden a la presente investigación, dado que se cumplen en la especie los requisitos establecidos en el artículo 560 N° 2 del Código Orgánico de Tribunales, esto es, todas ellas se derivan de la existencia de una política de persecución e eliminación de los adversarios políticos que detentaron el poder a partir del 11 de Septiembre de 1973 y que se manifestó a través de la actuación de agentes del Estado pertenecientes a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, incluyendo además a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, todos los cuales concretaron sus designios delictivos a través de distintas formas y maneras, esto es, ejecutando sumariamente a personas, haciendo desaparecer a los enemigos del régimen, deteniéndolos sin orden de tribunal competente, aplicarles torturas y aplicación de tormentas y deteniéndoles ilegalmente o secuestrándolos por periodos indeterminados de tiempo. Esta persecución y actuación sistemática de los agentes del Estado se conforma como uno de los elemento para considerar todas las figuras como crímenes de lesa humanidad, lo que trae aparejado que al designarse Ministros en Visita Extraordinaria para el conocimiento y fallo de estos crímenes, se conozcan todas estas materias a través de un mismo órgano jurisdiccional, el que en todo caso ya se encuentra constituido legalmente antes de la comisión de cada hecho, modificándose solamente la persona encargada de la investigación y fallo, como ha ocurrido en la mayoría de los casos.

En tercer lugar, por cuanto las situaciones delictivas conocidas en este proceso, son conexos con aquellos mencionados en el Acta 81-2010, pues, como ya se dijo, se trata de una actuación institucional que tuvo lugar en todo el país y que se manifestó de diversas formas, teniendo relevancia para estos efectos la posición de las víctimas, en el sentido de que la investigación está precisamente enfocada a la represión jurídica de situaciones que no han sido investigadas durante muchos años, evidenciándose de esa forma la responsabilidad del Estado en orden a su deber de investigar, lo que ha sido cumplido en el orden jurisdiccional a través de las instrucciones, actas y autos acordados dirigidos precisamente a ese fin, conocer y fallar aquellos procesos que han importado una transgresión importante a los Derechos Humanos de las víctimas, como ocurre en la presente investigación.

**Sexto:** Que respecto a la excepción de previo y especial pronunciamiento, consistente en la amnistía que se habría dictado el año 1978, y a que se refiere el considerando segundo de esta sentencia, si bien se indica que los hechos constitutivos de la presente investigación caen dentro de los términos del Decreto Ley 2191 de ese año, lo cual es cierto, esa normativa resulta inaplicable al caso de autos, toda vez que los delitos que aquí se investigan, secuestro con grave daño y aplicación de tormentos, conforme a los convenios de Ginebra dictados en 1949 y con aplicación en Chile desde el año 1951, se consideran crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ello es así porque se ha concordado de que se trata de crímenes de especial gravedad que son cometidos por agentes del Estado en contra de personas que se encuentran inermes e indefensas ante la actuación estatal, en un contexto histórico en donde no se han respetado las garantías básicas de los ciudadanos; existe una concentración del poder en órganos que no tienen ningún control de otros que podrían equilibrar o atenuar sus amplias atribuciones, y en donde la actuación de los tribunales



ordinarios de justicia es entorpecida a través del clima irregular que vivió el país en esa época, no actuando con la plenitud de sus facultades que debieran tener en estos casos. Es por todo ello que estos atentados graves se consideran crímenes de lesa humanidad, y consecuencia de ello, conforme lo señalan el artículo 3° de los Convenios de Ginebra y el artículo 147 del Convenio IV de esa misma convención, no es posible amnistiar estos ilícitos y exonerar de responsabilidad a los responsables de cometer estos crímenes. En concreto, se prohíbe la auto amnistía, pues en dicho caso, las propias fuerzas armadas dictan una normativa que exonera de responsabilidad a los mismos miembros que cometieron estos delitos de lesa humanidad. Que esta conclusión es la vigente en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, y además porque se considera que en el periodo indicado en el Decreto ley ya referido, el país se encontraba en “estado o tiempo de guerra”, por lo que, ante esa situación, son aplicables plenamente los Convenios de Ginebra ya mencionados, desde el momento en que jurídicamente el país se puso en esa situación. Por último, si bien es cierto el decreto ley en cuestión no ha sido derogado y se encuentra vigente, lo importante en este caso es que se trata de una normativa inaplicable por las razones ya dichas, y consecuencia de ello, no puede ella invocarse tanto como excepción de previo y especial pronunciamiento, y también como causal extintiva de responsabilidad. En mérito de lo señalado, esta excepción de previo y especial pronunciamiento será rechazada.

**Séptimo:** Que, respecto a la excepción de previo y especial pronunciamiento de prescripción que también opone la defensa de estos acusados, la que se indica en el considerando tercero de este fallo, también cabe rechazar esta pretensión; y ello, en base, además, parcialmente, a los mismos argumentos ya planteados para rechazar la amnistía y otras consideraciones que a continuación se agregarán. En efecto, derivado del hecho

de que este proceso versa sobre crímenes de lesa humanidad, como lo son el secuestro con grave daño y la aplicación de tormentos o tortura, según ya se ha explicado, son aplicables los Convenios de Ginebra ya referidos, estatuto que al igual que la amnistía, prohíbe la aplicación de la prescripción. Dicha conclusión resulta lógica, pues si los crímenes en cuestión los cometen los agentes del Estado, existe todo un aparato gubernamental que cubre o pretende cubrir estas actuaciones, las ampara y las protege, tanto desde el punto de vista de la comisión de los delitos como de la futura impunidad que se busca, teniendo en consideración también que a los Tribunales Ordinarios de Justicia, en la época en cuestión, se les coarta y constriñen sus atribuciones y facultades fácticas, dado el contexto en que tales hechos ocurren, por lo que resulta ilusorio y vano las normas sobre prescripción internas que posee el país, pues resulta que, como en el presente caso, cuando se reinicia parcialmente el período de normalidad constitucional y pueden ejercitarse con seriedad las acciones criminales que se derivan de los crímenes ya referidos, dichos plazos se encuentren vencidos con creces. En virtud de ello, resulta común a muchas otras latitudes que las normas internacionales y convenios que se refieren a temas de derechos humanos, hayan prohibido la aplicación de la prescripción en estos casos, puesto que la conciencia jurídica universal de la sociedad a nivel planetario, quedaría truncada y vacía. Por último, la aplicación de las normas del *ius cogens* en materias de derechos humanos, impiden racional y lógicamente que una institución como la prescripción, pueda operar en estos casos, dado que iría precisamente en contra de los valores que como sociedad se pretenden cautelar, en el sentido de que cualquier ciudadano, los menos que puede pretender ante un crimen que ha sufrido, es que ese ilícito se investigue y se determine quienes fueron los responsables. En virtud de lo señalado, también esta excepción

de previo y especial pronunciamiento de prescripción, será rechazada en todas sus partes.

**B.- En cuanto a la determinación de los hechos punibles:**

**Octavo:** Que, en orden a acreditar los hechos materia de la acusación fiscal y acusación particular ya reseñada, se han reunido en este proceso los siguientes elementos de convicción:

**1.- Querella criminal** de Oscar Ibaceta Jorquera, de fojas 1 y siguientes, por los hechos ocurridos a su persona en el mes de febrero de 1974 en la comuna de Valparaíso, en contra de quienes resulten responsables, por los delitos de secuestro y tortura, señalando que, para la fecha en que ocurrieron los hechos, él tenía 14 años de edad. Se encontraba en la ciudad de Santiago en casa de familiares, llegó un amigo a avisarle que habían detenido a dos compañeros de célula de las Juventudes Comunistas a la que él pertenecía y le dijo que había sido allanada la casa de sus padres donde él vivía, y a la vez habían dejado una citación en la que lo amenazaban de no dejar en libertad a otros jóvenes que eran sus amigos, por lo que al escuchar esto decidió regresar a Valparaíso, y se presentó en la Academia de Guerra Naval de la Armada, quedando de inmediato detenido. Luego de varias horas lo trasladaron al Cuartel Silva Palma y antes de entrar le cubrieron el rostro con la chaqueta que llevaba puesta, luego llegaron días interminables de interrogatorios, de golpes de pies y puños, corriente en los testículos y en distintas partes del cuerpo. Luego de 20 días, Ibaceta Jorquera fue dejado en libertad, debiendo asistir cada domingo a la comisaría de Cerro Alegre a firmar durante once meses. Todo lo anterior, provocó en él graves secuelas psicológicas, las que son múltiples y profundas, le costó volver a estudiar, ya que en aquel entonces él cursaba 1° medio.

**2.- Informe policial** N° 19 de 02 de enero de 2014, evacuado por la Brigada Investigadora de Delitos contra los

Derechos Humanos de la PDI, de fojas 47 a 53, que contiene declaración extrajudicial de la testigo Elena del Carmen Quiligrán Ugalde y determinación del sitio del suceso.

**3.- Declaración extrajudicial que Elena del Carmen Quiligrán Ugalde** prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 51, señalando que ella es la esposa de Ibaceta Jorquera desde 1976. Respecto a lo que pasó a Ibaceta Jorquera en febrero de 1974, él le contó que para esa fecha él vivía en calle Ferrari N° 1151, Cerro Florida, comuna de Valparaíso y se encontraba estudiando en el Liceo Eduardo de la Barra y paralelamente era militante de las Juventudes Comunistas en la comuna de Valparaíso. Para la época en que suceden estos hechos, mientras Oscar se encontraba en Santiago, su padre había recibido una citación para él en Valparaíso, y que decía que tenía que presentarse en la Academia de Guerra Naval. Seguido esto, Oscar se enteró que varios de sus amigos de las Juventudes Comunistas hombres y mujeres, habían sido detenidos por efectivos navales y trasladados hasta dependencias de la Academia de Guerra Naval. Entre aquellos amigos, Ibaceta Jorquera mencionó a Morelia Fernández Montenegro, Viviana Fernández Montenegro, Patricia Zavala Núñez, Patricio Fernández Avilés y Patricio Olivares Altamirano, entre otros más de quienes no recuerda los nombres. Ante esta situación, Oscar viajó desde Santiago a Valparaíso e inmediatamente se presentó en la Academia de Guerra Naval, quedando inmediatamente detenido en ese lugar, para luego ser interrogado y torturado por efectivos navales de esa repartición. Estos interrogatorios siempre estaban acompañados por golpes de pies y puños, aplicación de corriente en sus testículos y distintas partes del cuerpo, los que se prolongaron por varios días. Estos interrogatorios siempre tuvieron la finalidad de obtener información de los demás militantes de las Juventudes Comunistas, y siempre estaban amenazados de que si no

entregaban antecedentes matarían a sus familias. Después que estuvo varios días detenido en la Academia de Guerra Naval, Oscar fue dejado en libertad debido a su edad, ya que en esa época tenía 14 años, pero lo soltaron con la condición de que debía ir a firmar todos los domingos en la Comisaría de Carabineros del Cerro Alegre. Con el tiempo esto le ha provocado graves secuelas psicológicas múltiples en su marido las cuales se han mantenido hasta la actualidad. No recuerda haber escuchado nunca a Oscar haber mencionado algún nombre de los efectivos navales que le provocaron las torturas al interior de la ACANAV.

**4.- Declaración judicial** de Oscar Ibaceta Jorquera, de fojas 59 y 74, en la cual ratifica lo declarado por su esposa a fojas 51, y agrega que cuando fue detenido en febrero de 1974, al presentarse en la Academia de Guerra, lo trasladaron al cuartel Silva Palma, lugar donde fue interrogado por unas dos o tres personas, a quienes no recuerda bien porque estaba encapuchado, le propinaron golpes de pies y puño, además de corriente en diversas partes del cuerpo. En dichos interrogatorios le preguntaban por armas y por los nombres de los dirigentes del Partido Comunista. Una vez que terminaban los interrogatorios, era conducido a una celda en donde le quitaban la capucha, en ese lugar se encontraba detenido un señor de apellido Arellano o Orellana, que era dueño de la radio Victoria de Limache, le parece, estaba detenido junto a su hijo. También estuvo detenido junto a dos amigos, de nombre Patricio Fernández y Patricio Olivares, ya fallecidos. Nunca fue llevado a la Academia de Guerra, solo estuvo ahí cuando se presentó a la citación. En el cuartel Silva Palma había dos celdas, una para hombres y una para mujeres, en ellas había alrededor de unas 30 personas, entre adultos y niños, estaban una en frente de la otra. Los interrogatorios se realizaban a cualquier hora, de día o de noche.

**5.- Informe psicológico** N° 195/2014 del Servicio Médico Legal de Valparaíso de fojas 82, que da cuenta de la pericia realizada al querellante y víctima **Oscar Ibaceta Jorquera** en el marco del Protocolo de Estambul, y que concluye que el evaluado evidencia indicadores de daño emocional, familiar y psicosocial que resultan compatibles con los hechos denunciados, desprendiéndose como consecuencia directa de los mismos. Dentro de los indicadores destacan sentimiento de amenaza y desorganización vital; desarraigo familiar y político que afecta procesos evolutivos e identitarios, como el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la autoridad, siendo deslegitimizada esta última. Finalmente, es posible reconocer que el daño evidenciado se ha visto atenuado, en virtud de factores resilientes que subyacen al desarrollo vital del evaluado.

**6.- Declaración judicial** de Bertalino Segundo Castillo Soto de fojas 90 y 177, Suboficial en retiro de la Armada, quien señala haber cumplido funciones de interrogador en la Academia de Guerra Naval entre el 28 de septiembre de 1973 y la segunda quincena de diciembre del mismo año. Que durante su permanencia como interrogador en la Academia de Guerra Naval, nunca vio detenidas a personas menores de edad ni le tocó interrogarlos.

**7.- Declaración judicial** de Juan Orlando Jorquera Terrazas de fojas 107, Suboficial Mayor en retiro de la Armada de Chile, que señala que antes del Golpe de Estado él era instructor de la Armada, especialmente de los “Comando”, e incluso la institución lo designó junto a otras 41 personas para ir a perfeccionarse a Estados Unidos donde estuvo un año, esto fue en el año 1962 según él recuerda. Atendida su calidad de instructor y con conocimientos especializados en interrogatorios y física, es que posterior al Golpe de Estado, el Comandante en Jefe de la Armada en esa época lo designó como interrogador en el Cuartel Silva Palma. Ahí llegaban muchos detenidos a quienes debía interrogar, nunca los torturó, solo interrogó. Nunca

interrogó menores de edad en el Cuartel Silva Palma, nunca vio a los otros instructores interrogar a menores. Si puede decir que un grupo de la Armada llevaba detenidos menores de edad al cuartel, pero que una vez que los interrogadores comprobaban la edad de éstos, eran liberados del cuartel porque no procedía su interrogación.

**8.- Declaración judicial** de Elena del Carmen Quiligrán Ugalde de fojas 122, que señala que ratifica la declaración extrajudicial de fojas 51, y además agrega que ella vio las lesiones que le quedaron a su esposo y víctima de autos, producto de la tortura y la corriente que le ponían en los testículos. Vio que la ingle de la víctima tenía quemaduras, pues al poner corriente, las células de los tejidos mueren y es difícil sanar el tejido de la piel, manteniéndolas hasta el día de hoy.

**9.- Declaración judicial** de Patricio Marcelino Salazar Abarzúa, de fojas 115, señalando que conoce al querellante desde el año 1972, por tener amigos en común, quienes se juntaban en el sector de Yervas Buenas. El declarante tenía 15 años, e Ibaceta tenía un año menos. Él estaba en conocimiento de las actividades sociales y políticas que tenía Oscar, él de forma no oficial también realizaba actividades en las Juventudes Comunistas ya que repartía de la JAP víveres junto a su padre. Ibaceta iba regularmente a Santiago porque tenía familiares allá, así que era extraño no verlo por varios días. En una oportunidad en el verano de 1974 el declarante fue a buscar a Ibaceta al cerro en el que vivía y unos amigos le dicen que mejor no se acerque porque la situación estaba complicada, enterándose que había sido allanada la casa del querellante, y su padre resultó detenido. Luego se enteró por un hermano de Ibaceta, que éste había sido llevado detenido a la Academia de Guerra Naval.

**10.- Declaración judicial** de Guillermo Enrique González Astudillo, de fojas 122, quien señala que conoce al querellante desde que él tenía 9 años, por tener amigos en común, quienes se juntaban en el sector de Yervas Buenas. El declarante no

estaba en conocimiento de las actividades sociales y políticas del querellante, ya que solamente hablaban de fútbol. Recuerda que algunos meses después del 11 de septiembre de 1973 Oscar desapareció y él no tenía conocimiento de por qué. Le preguntó a un amigo y éste dijo que era por motivos políticos. Después se enteró que había sido allanada la casa de sus padres, pero no le dieron mayores detalles, lo que cree porque su padre y tío eran funcionarios de la Armada. Tiempo después de su detención se encontró con Ibaceta, quien iba a firmar a la Comisaría. El declarante le preguntó dónde iba e Ibaceta le contesta que a firmar, explicándole que estuvo detenido por razones políticas. Después de la detención del querellante, éste se vio más callado, cambiado, porque él era bueno para hablar y ahora estaba más retraído.

**11.- Declaración judicial** de Gladys Patricia Zavala Núñez de fojas 135, quien señala haber sido detenida por personal de la Armada de Chile en febrero de 1974, siendo trasladada al Cuartel Silva Palma, al igual que otros chicos de su cerro, como la víctima de autos. La declarante vio a Ibaceta Jorquera mientras estuvo detenida en el Cuartel Silva Palma. Él estaba en la celda de enfrente a la suya. Las puertas tenían una ventana en la parte superior, y ella estaba en el camarote superior. Desde ahí podía ver hacia el frente, que también tenía la misma ventana en la puerta, así es donde ve a Oscar y comienzan a comunicarse por señas para saber cómo estaban. Sin embargo, pudieron hacer esto solo por un día ya que los agentes del estado se dieron cuenta de lo que hacían y les taparon la ventana.

**12.- Declaración judicial** de Gilda Mercedes Ulloa Valle de fojas 155, Suboficial retirada de la Armada de Chile, quien señala haber sido trasladada a Valparaíso en abril de 1974, cumpliendo solamente funciones administrativas en el SICAJSI Valparaíso.



**13.- Declaración extrajudicial** que Adolfo Federico Walbaum Wieber prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 246 y de fojas 507, quien señala que para el día 11 de septiembre de 1973, él tenía el grado de Contra Almirante, y con motivo de la ida del Almirante Merino a Santiago, éste le ordenó hacerse cargo de la Jefatura de la 1° Zona Naval y paralelamente ocupar el cargo de Intendente de la Región. En el cargo de Jefe de Estado Mayor de la 1° Zona Naval, continuó el Capitán de Navío Sr. Guillermo Aldoney Hansen. Walbaum Wieber era la máxima autoridad del CAJSI en la provincia de Valparaíso. Nunca tuvo conversación alguna con el Jefe del SICAJSI, el Sr. Barra von Kretschmann, quien sabe que físicamente estaba en la Academia de Guerra Naval, nunca le rindió cuenta de su trabajo, sino que probablemente al Jefe de Estado Mayor, quien lo mantenía informado de los hechos de relevancia y del funcionamiento general del SICAJSI. De los trabajos realizados por el SICAJSI, se enteraba en forma generalizada a través del Sr. Aldoney.

**14.- Declaraciones extrajudiciales** que Guillermo Samuel Aldoney Hansen prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 248 y 415, quien señala que para el 11 de septiembre de 1973 tenía el grado de Capitán de Navío y el cargo de Jefe de Estado Mayor de la 1ra. Zona Naval, siendo el Comandante en Jefe de ella a contar de esa fecha, el Contralmirante Adolfo Walbaum. Efectivamente, el plan “cochayuyo”, que estaba dispuesto mucho antes del 11 de septiembre de 1973, involucraba varias reparticiones terrestres y unidades de flote.

**15.- Declaraciones extrajudiciales** que Sergio Manuel Barra von Kretschmann prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 250 y 424, quien señala que días después del 11 de septiembre de 1973, siendo Subdirector de instrucción de la Armada, fue derivado por el Almirante Merino como Jefe del SICAJSI,

teniendo dependencia directa del Contra Almirante Walbaum y excepcionalmente se entendía con el Capitán de Navío Aldoney. A inicios de 1973, el Jefe de la 1° Zona Naval de ese entonces, el Almirante Merino, le ordenó confeccionar un plan defensivo, el que denominó “Plan Cochayuyo”, el que fue un plan defensivo, no contra el Presidente Allende, sino que contra fuerzas imaginarias que supusieron era el Ejército, es decir, fue preparado ante la incertidumbre de contar o no con el Ejército, ante la eventualidad de que el Regimiento Maipo o Coraceros no apoyara el pronunciamiento, en el supuesto de que pudieran atacar Valparaíso o Santiago.

Tiempo después, en el mes de octubre, fue destinado como Director de la Academia de Guerra Naval. Ya una vez como Jefe del SICAJSI instruyó a su personal que se abocara a mantener la seguridad interior y el orden público de la ciudad. Efectivamente ordenaba detener a las personas vinculadas a la subversión, militantes del MIR, del MAPU. Si supuestamente existían heridos en estos allanamientos de morada, estaba considerado el Hospital Naval.

Allí, alojó a detenidos en el tercer piso del edificio, hasta cuando ya no cabían más personas, por problemas de hacinamiento. Por lo mismo, solicitó trasladar a los detenidos a otra repartición, siendo remitidos al buque mercante Lebu. En la Academia de Guerra Naval no se realizaban labores de inteligencia, ni había grupos operativos. Había eso sí, grupos no subordinados a él de distintas instituciones que trabajaban en la ACANAV, no recordando a qué se dedicaban. Respecto al grupo de la Armada que trabajó en estas labores, eran funcionarios operativos, no de inteligencia ni de análisis. Este grupo era conformado por 15 o 20 hombres. El declarante señala haber tenido un segundo (comandante), quien estaba a cargo de las funciones operativas.

Recuerda a Rigoberto Cruz Johnson como uno de sus asesores en el SICAJSI.

**16.- Declaraciones extrajudiciales** que Franklin González Rodríguez prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 252 y 446, quien señala que en 1972 se encontraba haciendo el curso de Estado Mayor, y en julio de 1973 el mando institucional dispuso el traslado a la 1° Zona Naval de todos los que estaban en el curso de Estado Mayor, esto con el objeto de confeccionar un plan defensivo contra la subversión y el terrorismo por las constantes amenazas de ataques a las reparticiones de las Fuerzas Armadas. A este plan le dieron el nombre de “Plan Cochayuyo” y la misión de quienes participaron de este plan fue recopilar información del “enemigo”, es decir, de las células subversivas y de extrema izquierda. El Jefe de Estado Mayor de la 1° Zona Naval, el Capitán de Navío Aldoney, lo designó para recopilar esa información, cuya labor no fue difícil, ya que los subversivos manifestaban abiertamente su postura y otras personas contribuyeron voluntariamente con información. Luego fue aprobada la Ley de Control de Armas y el Juez Naval, que era el mismo Almirante Merino, dio la orden de efectuar allanamientos en la Zona; el declarante señala haber participado en el allanamiento al gasómetro. Estas acciones fueron previas al 11 de septiembre de 1973. Para después de esa fecha, el declarante ostentaba el grado de Capitán de Fragata, junto a los Oficiales Rigoberto Cruz Johnson y Erwin Conn Tesche, continuando los 3 siendo dotación de la 1° Zona Naval, debiendo seguir con la elaboración de programas de análisis e inteligencia para combatir la subversión. En reemplazo del Almirante Merino, quien asumió el mando de la institución, asumió el Contra Almirante Walbaum. El Jefe del Estado Mayor de la 1° Zona Naval era el Capitán de Navío Aldoney. Los Oficiales Cruz y Conn también fueron destinados a la Academia de Guerra Naval. Después del pronunciamiento militar sus fuentes de información eran abiertas pero más escasas. Su función fue hacerse cargo de la Inteligencia Naval-ANCLA II, que en un comienzo estuvo

formado por un grupo reducido de personas. Durante los primeros días tuvo que ir a Santiago, y de regreso a Valparaíso, el Capitán de Navío Aldoney le ordenó trasladarse a la Academia de Guerra Naval donde se hizo cargo de la parte administrativa del SICAJSI, para ordenar su funcionamiento. El Jefe del SICAJSI, el Capitán de Navío Barra von Kretschmann, le ordenó hacerse cargo de un equipo destinado a la revisión de información que se recibía de la gente operativa, asimismo, recibía la nómina de los detenidos. De todo su trabajo le daba cuenta directa al Comandante Barra. La Academia de Guerra Naval fue destinada como centro de detención, por lo que se fijó un régimen interno de lo que también se hizo cargo. A toda persona, previo a la confección de una ficha con sus antecedentes, se le bajaba al cuartel Silva Palma para ser interrogada por el personal que tenía dicha función. A cargo de este cuartel estaba el Capitán de Corbeta Abel Osorio. Dentro de la Academia de Guerra Naval se recibió a un grupo de carabineros a cargo del Mayor Trobok y también un grupo de personal de investigaciones a cargo del Comisario Orlando Gutiérrez Díaz. El personal oficial de la Armada que realizaba funciones operativas en la Academia de Guerra Naval estaban, el Capitán de Fragata Jaime Román Figueroa, Capitán de Corbeta Julio Faunez Córdova, el Teniente Sergio Bidart Jiménez, el Teniente **Jaime Riesle Wetherby**, todos estos se vinculaban con los detenidos, tomarles declaración, realizar detenciones allanamientos. Todo este personal le daba cuenta directamente al Comandante Barra. Tiene entendido que los interrogatorios se llevaban en el Cuartel Silva Palma. No tiene noción que se hayan realizado en la Academia de Guerra Naval. Veía pasar a los interrogadores o personal gente de mar que llevaban las fichas de cada uno de los detenidos, las que eran confeccionadas en la Academia de Guerra. Los detenidos permanecían tanto en la Academia de Guerra Naval como en el Cuartel Silva Palma, principalmente para ser interrogados y lo que resultara de estas

indagaciones, eran trasladados a los centros de detención, que eran los buques mercantes y el Buque Escuela Esmeralda.

**17.- Declaraciones extrajudiciales** que Carlos Francisco Alfonso Libano Riquelme prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 268 y de fojas 466, quien señala que para el 11 de septiembre de 1973 fue designado al cuartel Silva Palma, quedando en una dotación de 4 a 5 personas en una patrulla para realizar solamente detenciones de personas, siendo su jefe directo el Teniente Segundo Sergio Bidart Jiménez. Los otros integrantes de la patrulla, no puede recordar sus nombres, pero uno de ellos, empleado civil filiación azul, tenía junto al declarante a cargo la conducción de la camioneta asignada a la patrulla, de marca Chevrolet modelo C-10 color blanco. En algunos casos, el Teniente Bidart salía manejando la camioneta, en ese caso los conductores se quedaban el cuartel y el teniente salía con su gente. En otras oportunidades esa camioneta era ocupada por otros grupos. El teniente Bidart recibía órdenes escritas de detención de personas que eran emitidas desde la Academia de Guerra Naval, presume que del SICAJSI y con la patrulla salían todos vestidos de uniforme de mezclilla color verde y botas negras y casco color verde. Cumplían detenciones principalmente en los cerros de Valparaíso y ocasionalmente en Viña del Mar. Los detenidos eran trasladados hasta la Academia de Guerra Naval y los entregaban a la gente de guardia, luego se retiraban ya que tenían prohibición de pasar a la zona de interrogatorio, que eran tanto en la Academia como en el Cuartel Silva Palma.

**18.- Declaraciones extrajudiciales** que Sergio Emilio Bidart Jiménez prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 283 y 426, quien señala que hacia el año 1973 era de la dotación de la Escuela de Ingeniería Naval, la que estaba conformada en compañías, específicamente 4. Él pertenecía a la “Compañía de

Reserva” de la V Región, la cual estaba para destinada a concurrir cada vez que se requería apoyo de la fuerza. Su compañía estaba a cargo del Comandante **Jaime Riesle Wetherby**. Los primeros días estuvieron instalados en el Regimiento Maipo y después se trasladaron al Cuartel Silva Palma. El declarante, en su calidad de oficial, estuvo a cargo de una de las secciones de la compañía. La función de su sección era la de cuidar a los detenidos que permanecían en el cuartel Silva Palma, realizar patrullajes en la zona y realizar ordenes de detención de personas, ordenes que provenían de la Academia de Guerra Naval, en una hoja de papel roneo, firmada por alguien que no recuerda, y con el nombre de la persona a detener. Estas detenciones en un 90% eran practicadas en la noche, y también estaban a cargo de otros tenientes como Ricardo León Burgos, Mario De Giorgis Guarachi y Armando Sartori Zúñiga. Como Jefe de la Academia de Guerra Naval, el declarante tiene la noción de que era el Capitán de Navío Erwin Conn Tesche. Su grupo utilizaba una camioneta color café achocolatado, cuyo código era café 1. Generalmente eran 5 las personas que salían en la camioneta para realizar labores operativas. Respecto a las vestimentas, en un comienzo eran de color azul marino, y luego utilizaron unas tenidas de mezclilla color verde. En el cuartel Silva Palma en ese tiempo existía una especie de galpón que se habilitó para mantener detenidos, había otro sector habilitado para personal naval que por distintas razones estaban detenidas pero que después del 11 de septiembre de 1973 fue utilizado para las mujeres detenidas, y existía otro sector del cuartel donde estaban los dormitorios de la dotación, lugar donde pernoctaban los oficiales solteros como él. Durante ese periodo, en el cuartel Silva Palma no había sectores habilitados ni personal para interrogar. Cuando llegaban con los detenidos a la Academia de Guerra Naval, estacionaban el vehículo en el patio interior, informándose de su llegada a la guardia de la misma Academia, y bajaba del edificio

alguien que era avisado por el guardia y éste lo ingresaba, hasta aquí llegaba la función del declarante. En cuanto a las personas que eran interrogadas en la Academia de Guerra por personal de la Armada, no conoció a nadie, aunque sabe que hubo personal de Infantería de Marina y funcionaban arriba en la Academia de Guerra. En cuanto a personal de Carabineros, el declarante vio en algunas ocasiones a personal civil y que al preguntarle a alguien le dijo que eran de Carabineros, apodados “Cebolla” y “Murciélago”.

**19.- Declaraciones extrajudiciales** que Nelson Roberto López Cofré prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 292 y 360, quien señala que en abril de 1973, siendo parte de la Comisión Civil de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso, pasó a depender del Departamento Ancla 2 de la Armada de Chile, en investigaciones de la Ley de Control de Armas. El jefe del Ancla 2 era el Comandante Franklin González Rodríguez. Desde esa fecha comenzó a trabajar con un grupo de Carabineros conformado por un Suboficial Mayor cuyo nombre no recuerda, conocido como el “cabeza de ajo”, el Cabo 2° Jorge Leiva, conocido como el “Cebolla” y el Cabo 1° Vergara, conocido como el “Murciélago”. Sus instrucciones eran detectar a través del control de armas, el contrabando, la parte subversiva y células extremistas del MIR o el MAPU. Inmediatamente después del pronunciamiento militar fue destinado por orden superior a la Academia de Guerra Naval para ponerse bajo las órdenes del aquel entonces Teniente Héctor Trobok Silva, a quien se le destinó una oficina dentro de las instalaciones de la Academia, quien ya en ese entonces mantenía una dotación de ayudantes y otros subalternos, conformando un número de aproximadamente 20 a 25 funcionarios. Las órdenes de aprehensión en el caso de ellos, eran emanadas del Coronel Trobok. El mando de la Academia de Guerra Naval y del SICAJSI era uno solo, el Capitán de Navío Sergio Barra von

Kretschmann, quien también decretaba órdenes de aprehensión, que obedecían a gente de las células extremistas, del MIR, del MAPU, las que eran ejecutadas por personal de la Armada. También se cumplían órdenes de aprehensión sin decreto, salían de propia iniciativa y en algunos casos trabajaban en los interrogatorios en conjunto con el personal de la Armada.

**20.- Declaraciones extrajudiciales** que Ángel Segundo Lorca Fuenzalida prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 294 y 365, quien señala que para el 11 de septiembre se encontraba haciendo uso de su feriado legal y dada la situación tuvo que regresar inmediatamente a su unidad, es decir, a la 3° Comisaría, lugar en donde quedó acuartelado y comenzó a encargarse de la parte logística de la Comisaría. A la semana siguiente, seguramente después de Fiestas Patrias, lo llamó el Comandante Héctor Trobok, Jefe de su Comisaría, quien le comentó que se iba a la Academia de Guerra Naval a “formar un Estado Mayor Conjunto con la Armada”, dándole la orden de partir con él, junto con los carabineros Marcos González y José Villenas, conocido como “el chino”. Los primeros días en la Academia, estuvieron sin mucho trabajo y el denunciante cree que paralelamente junto con él llegó el Teniente Héctor Tapia Olivares y el Subteniente Marcelo Vargas Goas, compañero de curso del declarante en la Escuela de Carabineros. Llegaron a trabajar a una organización que se llamaba SICAJSI, cuya finalidad nunca tuvo muy clara. De los oficiales de la Armada que allí se desempeñaron, recuerda a Erwin Conn, un tío y un sobrino de apellido Mackay, otro de apellido Soto-Aguilar, un Teniente 1° de apellidos Lorca Leroy, a **Ricardo Riesco** y a otro funcionario de apellido Le-Bert. También hubo personas del Ejército y de Investigaciones. Su función en la Academia era dar cobertura y apoyo a los equipos navales que concurrían a hacer detenciones y allanamientos en toda la ciudad de Valparaíso, ya que por su labor policial, conocían las calles y las ubicaciones de



domicilios mejor que los marinos. Para estas tareas, tenía a cargo un grupo, que se denominó “Zorro 3”. Hubo otros equipos “Zorros”, el número 1 a cargo de Héctor Tapia y el número 2 a cargo de Marcelo Vargas. Las órdenes de detención las realizaban conforme a una orden escrita en un papel que contenía nombres y en su parte inferior firmada, sin pie de firma. Dicho documento les era entregado por funcionarios de la Armada que realizaban labores similares a los Jefes de Servicio, pero que no eran de dotación de la Academia. Entre los otros Carabineros que se desempeñaron en la ACANAV debe hacer presente el declarante que había un oficial de Carabineros de apellido López, que trabajaba conjuntamente con dos suboficiales apodados “el Murciélago” y “el Cebolla”, este equipo realizaba otro tipo de labores, cree que avocada principalmente al área de los interrogatorios y no pertenecían a los grupos de “Zorros” en labores de cobertura.

**21.- Declaraciones extrajudiciales** que Luis Ricardo Araya Maureira prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 296 y 419, quien señala que el 14 de septiembre de 1973 es informado en su Unidad policial, la 6° Comisaría Almendral, que pasaba a prestar servicios en la Academia de Guerra Naval, debiendo presentarse con el Teniente Coronel Héctor Trobok, donde cumpliría funciones en una organización llamada SICAJSI, la que tenía el control de toda la zona de Valparaíso y sus alrededores, quedando a cargo del equipo de radio con el cual se mantenía contacto con la Prefectura de la ciudad. Trabajaba en una oficina ubicada en el primer piso de la Academia, en compañía del Comandante Trobok y 4 Brigadieres de Carabineros, las que tenían aproximadamente entre 23 y 30 años, quienes tenían función de trabajar con las mujeres detenidas. Con relación a los funcionarios de la Armada que allí se desempeñaban, recuerda a un oficial de nombre **Ricardo Riesco**, a quien vio en algunas oportunidades en el casino de la

Academia. Además recuerda a un oficial alumno de la ACANAV de apellido Aguirre y a un cocinero de apellido Santibáñez, conocido como “el chino”. Su labor estaba circunscrita solo al primer piso de la ACANAV, ignorando por completo las actividades que se desarrollaban en los pisos superiores de dicha unidad. En ese sentido, el control de todo el edificio de la ACANAV estaba en manos de la Armada. Nunca custodió detenidos, como así tampoco participó en interrogatorios. Solo supo que los detenidos llegaban al Cuartel Silva Palma, aledaño a la ACANAV, pero por tener solo el grado de Subteniente en ese tiempo, no tenía acceso a ese recinto. Finalmente, señala que cumplió la misma función de estar a cargo de las comunicaciones entre el comandante Trobok y la Prefectura de Valparaíso hasta aproximadamente el mes diciembre de 1973, siendo destinado a la 10° Comisaría de Fuerzas Especiales. Además, afirma no haber sido el ayudante del Comandante Trobok, ya que esa labor correspondía al Teniente Lorca.

**22.- Declaraciones extrajudiciales** que Jorge Leiva Cordero prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 298 y 357, quien señala que el día 11 de septiembre de 1973 se encontraba de turno como estafeta en la 8° Comisaría Barón y alrededor de las 11:30 horas llegó a la unidad el Teniente López, apodado “chico López”, quien se entrevistó con el Jefe de la Comisaría. A la salida de López, el declarante recibió la orden de ir a su casa a cambiarse ropa para quedar a disposición del Teniente López. En ese momento ya se encontraba junto a López el Cabo 1° Eduardo Vergara Brauer, conocido como “el Murciélago”. Luego de ir a su casa, se dirigieron inmediatamente a la Academia de Guerra Naval, donde se presentaron con el comandante Trobok y su ayudante, el Teniente Luis Araya. Allí pudo ver a un Capitán de Carabineros de apellido Tapia, quien disponía de un vehículo especial prestado por la Armada, y de quien presume, trabajaba directamente en los interrogatorios en el 4° piso de la

Academia. En la primera presentación con estos oficiales, se les informó que trabajarían en la ACANAV para detener a las personas que les indicaran. En ese entonces, en la Academia de Guerra Naval funcionaba el **Departamento de Operaciones**, compuesto por personal de la Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones y conoció también a un funcionario de Ejército. Como jefe del Departamento de Inteligencia Ancla 2 se desempeñaba el Comandante de la Armada de apellido González. De igual forma, del departamento de operaciones recuerda al Comandante de la Armada de apellido Mackay. Los detenidos primero eran llevados a la ACANAV y luego a la entrada del molo de Valparaíso, donde los recibían y posteriormente distribuían entre los buques. Él salía a trabajar en un Fiat 125 en compañía de Eduardo Vergara y el Teniente López. Las órdenes de detención las recibían del Teniente López, quien a su vez podría haberlas recibido del Comandante Trobok o del Comandante de la Armada Mackay, a quien apodaban afectivamente “tío galleta”. Durante esos días debió seguir en labores operativas de allanamientos y detenciones teniendo como unidad base la ACANAV, al igual que Eduardo Vergara. En la Academia, los interrogatorios se desarrollaban en el 4° piso, al cual nunca tuvo acceso. También había accesos en el cuartel Silva Palma, aledaño a la ACANAV, específicamente en unas construcciones de material ligero, tipo mediagua, ubicadas a un costado de una canchita que había en el cuartel, donde había muchos marinos detenidos en ese entonces. De entre los interrogadores de la ACANAV recuerda al Teniente de Carabineros Lorca, conocido como “el loco”, con quien participó en interrogatorios en la Esmeralda. De los interrogadores de la Armada, recuerda a Juan Mackay, a su pariente del mismo apellido, con quien también tuvo que interrogar a algunas personas.

**23.- Declaraciones extrajudiciales** que Juan Humberto Campos Cifuentes prestó ante la Brigada Investigadora de

delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 301 y 431, quien señala que para el 11 de septiembre de 1973, por órdenes de Rodolfo Stange Oelckers, tercero de la Prefectura de Valparaíso, debió concurrir con un grupo de carabineros a tomar el control de la Cárcel de Valparaíso. En el mes de octubre de ese año, lo enviaron al curso de antisubversión y guerrilla urbana en el destacamento “Miller” de la Infantería de Marina, el que duró alrededor de 3 meses. En diciembre de 1973 fue trasladado a la 10° Comisaría de Fuerzas Especiales, cuyo jefe era el Mayor Raúl Arellano Castillo. Trabajó allí hasta el verano de 1974, en que fue destinado de enlace a la Academia de Guerra Naval, unidad donde trabajaban instituciones combinadas de las distintas Fuerzas Armadas y de orden, trabajó en el Departamento de Análisis bajo las órdenes de los Capitanes de Corbeta Rigoberto Cruz Johnson y Erwin Conn Tesche; en el lugar, su función era clasificar por orden alfabético las hojas de antecedentes de los detenidos y de gente a detener, labor que había iniciado también el teniente de Carabineros Manuel Díaz Vieira, ya detenido. El funcionamiento de dicha unidad era compartimentado, pero supo que muchos funcionarios navales como de otras instituciones, se desempeñaban ahí desde los primeros días de instauración de la Dictadura Militar, entre quienes incluye a los ya señalados Cruz y Conn. Recuerda además, en esta misma condición, a un oficial de mar de apellido Fernández, el infante de Marina **Ricardo Riesco**, a quien en una ocasión al entrar repentinamente a una salita del Cuartel Silva Palma, sorprendió torturando a una persona en una cama de huinchas, conocida como “parrilla”, en las cuales se aplicaba electricidad; al **Sargento Hevia**, quien en algunas oportunidades le acompañó como conductor a realizar ciertas diligencias en la ciudad, entre las cuales recuerda haber ido a la Universidad Técnica Federico Santa María con la misión de contactarse con el Rector, quien les entregaba listados de

personas con filiaciones políticas para ser expulsados de dicho plantel de estudios.

**24.- Declaración extrajudicial** que María Elena Gálvez Valdenegro prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 303, quien señala haber sido detenida en su local comercial en la ciudad de Valparaíso días posteriores a las fiestas patrias en septiembre de 1973, por una patrulla de 3 efectivos navales uniformados con tenida de combate, quienes se movilizaban en un jeep, siendo trasladada a la Academia de Guerra Naval. La razón de su detención es por el hecho de estar buscando a su marido. Durante el tiempo que permaneció en ese lugar, fue interrogada, no recibiendo malos tratos. La declarante relata que luego del interrogatorio fue dejada en una sala por un tiempo, hasta que la trasladaron vendada a otra sala, en la cual fue fichada y se le tomó fotografías. Luego de eso, fue llevada a un patio desde el cual se veía el mar, donde fue subido a un bus repleto de personas. Una vez dentro, un funcionario de la ACANAV llamado **“Pedro Santibáñez”**, vestido de civil, comenzó a hacerle señas para que bajara del bus, y así luego la trasladó hasta su casa. Camino a su domicilio, “Santibáñez” le comentó que estaba siendo desconfiada, que menos mal se bajó, porque ese bus llevaba a las personas al “Lebu”. La declarante supo el nombre de “Santibáñez” posteriormente, ya que este funcionario, quien en esa época usaba bigotes bien prominentes y vistosos, comenzó a visitarla en su negocio, presentándose por ese nombre. Incluso, tiempo después llegó a arrendar una habitación a su casa por algunos problemas personales que él tenía. Gálvez Valdenegro señala haberle dado acogida en su casa a objeto de terminar con los acosos a los que la sometían los marinos. “Santibáñez” estuvo viviendo varios meses en su casa. A los meses después detuvieron a su marido, quien según le comentó después, reconoció por su voz a uno de los interrogadores como “Pedro Santibáñez”.

**25.- Declaración extrajudicial** que Bertalino Segundo Castillo Soto prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 339, quien señala que tras el 11 de septiembre de 1973, por orden del Departamento de Personal de la Primera Zona Naval, con el grado de Sargento 1°, fue trasbordado en comisión de servicio a la Academia de Guerra Naval, presentándose ante su director, oficial naval cuya identidad no recuerda. Hace presente que, en cursos de fuerzas especiales con los U.D.T. de Estados Unidos, recibieron instrucción respecto al tratamiento de los prisioneros de guerra. Por ese motivo, al llegar a la ACANAV fue designado para integrar un grupo de Infantes de Marina, divididos en 4 salas de a dos personas, con la misión de interrogar a las personas que permanecían recluidas en el recinto, pertenecientes a los partidos políticos de la Unidad Popular, especialmente a los partidos Comunista, Socialista, MIR, MAPU, con la finalidad de descubrir la tenencia de armas y/o explosivos. Por las características del trabajo de inteligencia, no tuvo la ocasión de conocer la identidad de los oficiales encargados de los procedimientos. Personalmente, él trabajaba con el también Sargento 1° Francisco Lagos Garcés (fallecido). También recuerda, de otras parejas de interrogadores, a los Sargentos **Juan Reyes Basaur**, Francisco Prado Espejo (fallecido), **Jaime Lazo Pérez y Alejo Esparza Martínez**. Todos ellos estaban bajo el mando del Suboficial Mayor Manuel Leiva Valdivieso. Los prisioneros eran trasladados a las salas de interrogatorio por Infantes de Marina que estaban a cargo de su custodia. Estas salas se encontraban en el 3° y 4° piso de la ACANAV. Según el conocimiento que el declarante tiene, los detectives y los carabineros que trabajaban en la ACANAV eran los encargados de ubicar y detener a las personas y no participaban mayormente en los interrogatorios. Los prisioneros llegaban encapuchados y los interrogadores los sentaban en una silla, procediendo a realizar las preguntas que se le entregaban

en un documento tipo formulario. Agrega que los interrogadores vestían de civil, formalmente, y utilizaban nombres o apodos para llamarse entre ellos. En su caso, ocupó 3 denominaciones: “judoka”, “ronny” y “el choro”, para prevenir eventuales represalias. En general, todas sus preguntas se dirigían a averiguar la tenencia de armas y explosivos. En esas labores se trabajaba en un horario de oficina de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. Una vez finalizada su labor, entregaban el material manuscrito al Suboficial Mayor Leiva, quien lo hacía llegar a una oficina de partes o evaluación, ubicada en el primer piso, desde donde procedían las órdenes para interrogar y se resolvía la situación de cada detenido, luego del análisis de sus informes. Una vez concluido el trabajo con los prisioneros, avisaban por citófono a la guardia, quien disponía el traslado de éstos, ya sea al recinto de reclusión instalado en la ACANAV o en el cuartel Silva Palma. Recuerda que algunos oficiales navales visitaban las salas de interrogatorios inspeccionando el procedimiento que se realizaba, sin intervenir en las preguntas que se realizaban. Entre estos oficiales recuerda al **Teniente Riesco** y al Segundo Comandante del Destacamento I.M. N° 2 “Miller”, Capitán Abrego. Castillo Soto permaneció en esa labor hasta diciembre de 1973, ya que fue destinado a Santiago para desempeñar funciones de seguridad en la Embajada de Chile en Colombia.

**26.- Declaración extrajudicial** que Erwin Hugo Andrés Conn Tesche prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 342, quien señala que para el año 1973 se encontraba como alumno de la Academia de Guerra Naval y fue enviado a reforzar el Estado Mayor del Almirante Merino, quien era su jefe directo, y quien cumplía las funciones de Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, de Juez Naval y de Comandante del Área Jurisdiccional de seguridad de la provincia de Valparaíso, teniendo como centro de operaciones la Academia de guerra Naval. Las misiones específicas que se le encomendaron ese día

fueron las de mantener las informaciones generales de lo que se estaba desarrollando, respecto a los allanamientos a los cordones industriales y las detenciones que se producían, no teniendo los nombres de las personas que eran detenidas. Esa labor la realizó todo el día 11 de septiembre de 1973, pasando al día siguiente a hacer labores de análisis de información con los alumnos de 1° año de la ACANAV. La persona que tenía a cargo las operaciones en terreno era el Capitán de Fragata Fernando Camus Scherrer, junto con el jefe del Estado Mayor, Comandante Aldoney, siendo este último quien le informaba al Almirante Merino sobre los hechos que se desarrollaban. El oficial a cargo del equipo de interrogación del Cuartel Silva Palma era el Capitán de Corbeta Soto-Aguilar. En la ACANAV estuvo un Capitán de Reserva del Regimiento Coraceros, cumpliendo funciones como analista, también estuvo el Mayor de Carabineros Héctor Trobok, cuyo equipo estaba formado por cuatro oficiales, quienes le informaban sus actuaciones directamente al Comandante Sergio Barra, Jefe del SICAJSI.

**27.- Declaración extrajudicial** que Enrique Orlando Corrales Díaz prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 345, quien señala que para el 12 o 13 de septiembre de 1973 fue destinado a la Comandancia de la Guarnición de la Provincia de Valparaíso, que se encontraba bajo el mando del antes director de la Escuela Naval, Capitán de Navío Carlos Borrowman. En esa función se encargaba de realizar labores de enlace entre la Comandancia de guarnición de la provincia y Carabineros, ya que la provincia se encontraba dividida en áreas jurisdiccionales, desempeñándose en dicha labor hasta enero de 1974, cuando es agregado al SICAJSI, con sede en la Academia de Guerra Naval, pasando a trabajar a la sección de análisis. No tenía contacto con el personal profesional que se encargaba de efectuar los interrogatorios, pero supo que esta labor era cumplida, principalmente, por personal de la Infantería de



Marina, quienes controlaban el sector del cuartel Silva Palma y el área restringida de la Academia de Guerra Naval en donde permanecían los prisioneros. En la ACANAV permaneció hasta el mes de marzo de 1975, fecha en la cual fue enviado a realizar un curso en la Escuela de Inteligencia del Ejército en la localidad de Nos.

**28.- Declaración extrajudicial** que Eduardo Rigoberto Cruz Johnson prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 348, quien señala que a la fecha del pronunciamiento militar, con el grado de Capitán de Fragata, se desempeñaba como Oficial alumno del primer año del curso de Estado Mayor de la Academia de Guerra Naval. A partir del 11 de septiembre de 1973 hasta fines de ese mes, le correspondió cumplir funciones como Jefe de Operaciones de las Fuerzas de Valparaíso, con asiento en la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval, dependiente del Comandante de las fuerzas de Valparaíso, en ese entonces el Capitán de Navío Carlos Borrowman Valenzuela, director de la Escuela Naval, quien tenía bajo su mando las fuerzas provistas por las escuelas de la Armada, para fines de control y seguridad urbana, las que estaban organizadas de acuerdo a un plan llamado “cochayuyo”, en una forma similar al despliegue que se emplea para el control de las elecciones a cargo de las diferentes comunas del gran Valparaíso. Una vez concluidas estas labores, a fines de Septiembre de 1973, fue destinado al SICAJSI, en donde fue designado Subjefe, asumiendo las labores administrativas, bajo las órdenes del Capitán de Navío Sergio Barra. Este organismo funcionaba en dependencias de la Academia de Guerra Naval. A mediados de noviembre de ese año entregó el cargo al entonces Capitán de Corbeta Erwin Conn Tesche. Su labor como Subjefe, a cargo de las labores administrativas, consistía en disponer de todos los servicios de guardia y turnos en general, el uso de los servicios básicos, entiéndase agua, luz, teléfonos, aseo y mantenimiento en

general de las dependencias. De esta forma, el jefe operativo y encargado de las labores de inteligencia que realizaba el SICAJSI era exclusivamente el Capitán de Navío Sergio Barra. Uno de los grupos de interrogadores se encontraba bajo el mando del Capitán de Fragata Hernán Soto-Aguilar Cornejo, quien trabajaba con personal de la Escuela de Infantería de Marina, de la cual era Subdirector, por lo que los designaba y rotaba personalmente.

**29.- Declaraciones extrajudiciales** que Juan Guillermo Mackay Barriga prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 290 y 369, quien señala que fue trasbordado a la Academia de Guerra Naval a fines de septiembre de 1973, luego de estar unos días cumpliendo funciones como ayudante del Jefe de Gabinete de la Primera Zona Naval, quien en ese tiempo era el Comandante Baquedano. En ese tiempo la ACANAV se encontraba al mando del Comandante Sergio Barra, donde se constituyó el mando del SICAJSI, que utilizó las instalaciones del Cuartel Silva Palma para complementar las actividades de inteligencia que comenzó a desarrollar, ya que este recinto contaba con dependencias para detenidos. De esta forma la ACANAV suspendió sus clases, y los alumnos comenzaron a cumplir funciones en el SICAJSI. Personalmente, llegó al departamento de análisis, siendo recibido por el Comandante Aguirre, quien le explicó las funciones que desempeñaría. En estas labores estuvo entre siete y diez días, tras lo cual lo designaron como enlace con las Brigadas Civiles, cargo que le permitiría una mayor libertad de desplazamiento en consideración a que debía reunirse en forma periódica con los integrantes de estas agrupaciones. Por lo antes señalado, no tuvo ningún contacto con el personal operativo ni con los funcionarios encargados de los interrogatorios. Sobre ese último punto, puede señalar que las funciones de interrogar detenidos se encontraban a cargo de personal de Carabineros,

Investigaciones e Infantes de Marina que hicieron el curso de tratamiento de prisioneros de guerra en Estados Unidos.

**30.- Declaración extrajudicial** que Jaime Erik Riesle Wetherby prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 389, en la cual señala que a finales de septiembre de 1973, por los acontecimientos ocurridos en el país, le correspondió integrar una compañía compuesta por 3 secciones de 30 hombres cada una. Cada una de las secciones se encontraba al mando de una oficial naval. En su caso, le correspondió dirigir esta compañía que fue destinada a cumplir funciones de seguridad perimetrales en el conjunto de edificios compuesto por el cuartel Silva Palma y la Academia de Guerra Naval. En ese momento, las dependencias del cuartel Silva Palma fueron utilizadas para la custodia de detenidos que se encontraban a cargo del personal de la ACANAV, en donde sentó su base de operaciones el SICAJSI 1ZN. De igual forma, el personal de gente de mar debió desempeñarse como vigilantes de los prisioneros y cumplir la función de trasladarlos al cuartel Silva Palma a dependencias de la ACANAV para ser interrogados. Personalmente no le correspondió realizar interrogatorios, como tampoco fueron labores que realizó la compañía bajo su mando.

En el tiempo en que se desempeñó como comandante de compañía, su superior directo era el comandante Soto-Aguilar. Entre los oficiales navales que se desempeñaron bajo sus órdenes, recuerda al Subteniente Rafael Mackay, Teniente Armando Sartori, Teniente Sergio Bidart, y Teniente Mario De Giorgis.

El sistema de trabajo de la guardia era similar al utilizado en los buques. De esta forma, la compañía se dividía en tres grupos. El primero de ellos, cumplía apostado el servicio de guardia; un segundo grupo descansaba y el tercer grupo prestaba colaboración en los allanamientos y procedimientos de búsqueda y detención de personas que, una vez aprehendidas,

eran ingresadas en la ACANAV, en donde se registraban sus datos, para posteriormente en un movimiento interno, ser recluidas en dependencias del Cuartel Silva Palma. Para el cumplimiento de estas labores, se recibía una orden escrita por parte del comandante Soto-Aguilar o por parte del oficial de guardia de la ACANAV. En estas labores estuvo hasta enero o febrero de 1974, fecha en la cual, reanudaron sus clases en la Escuela de Ingeniería Naval, por lo cual toda la compañía se reintegró a sus funciones normales.

**31.- Declaración extrajudicial** que Rubén Augusto Scheihing Navarro prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 396, quien señala que a contar del día 20 de septiembre de 1973 aproximadamente, en razón a las nuevas tareas que enfrentaba la Armada y a la carencia de oficiales de Estado Mayor, la superioridad lo destinó a la Academia de Guerra Naval, en donde permaneció hasta el 18 de octubre de 1973, dado que debía cumplir con el requisito de permanencia como segundo comandante para poder optar a ejercer como comandante de submarino. En consideración a que la Armada no estaba preparada para realizar estas nuevas funciones, le correspondió trabajar con el Capitán de Fragata Rigoberto Cruz Johnson en la organización de un sistema de trabajo que pusiera orden a las labores que se realizaban. De esta forma, se establecieron grupos operativos con la misión de dar cumplimiento a las órdenes de búsqueda y detención que se generaban. De igual forma, se dispuso de personal a cargo de los interrogatorios y se estableció que las declaraciones y antecedentes que se obtuvieran fueran analizadas y archivadas, procesando la información que generaba nuevas órdenes de búsqueda. No intervenían en la designación de los interrogadores ni en sus procedimientos, dando solo sugerencias sobre las materias que debían consultarse.

**32.- Declaración extrajudicial** que Orlando Durán Caballero prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 436, quien señala que para el 11 de septiembre de 1973 ostentaba el grado de Inspector y se desempeñaba en la Comisaría Judicial de Valparaíso y ese mismo día le tocó estar de Oficial de Guardia en la Prefectura de Valparaíso.

Para esa época existió el Centro de Inteligencia Regional de Valparaíso, desconocido cuando se formó, pero sí precisar que fue agregado en noviembre de 1974 al CIRE, siendo en esa fecha el primer Oficial de Investigaciones que llegó a trabajar operativamente. Al mando estaba el Capitán de Navío Francisco Johow. Este centro estaba conformado principalmente por personal de la Armada, todo estaba estructurado y compartimentado. En su caso, pertenecía a una unidad operativa compuesta por cuatro grupos operativos, siendo el jefe de uno de ellos. Su función operativa en el CIRE fueron tareas de recolección de información, realizar indagaciones todas relacionadas con asuntos subversivos, políticos, ubicar y detener personas por los mismos temas. Para esto último, actuaban con órdenes de las Fiscalías Navales, y los detenidos eran conducidos al Cuartel Silva Palma, que era un centro de detención de la Armada y que estaba ubicada colindante a la Academia de Guerra. Señala que ellos no interrogaban a los detenidos y desconoce qué sucedía después con ellos, sí por comentarios se enteró que los detenidos eran interrogados en el cuartel Silva Palma, presume por personal de la Armada. En ese tiempo, su jefe directo era el Teniente Infante de Marina González, y tuvo a su cargo personal subalterno, también infantes de marina, el sargento **Sergio Hevia** y un cabo al parecer de apellido Pulgar, que lo ocupaba de chofer.

**33.- Declaración extrajudicial** que **Sergio Hevia Febres** prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI a fojas 504 de estos autos, en la

cual señala que, a fines de noviembre de 1973 fue trasladado a la Comandancia en Jefe de la Primera Zona, pero para cumplir funciones en el CIRE (Centro de Inteligencia Regional). En el CIRE, que funcionaba físicamente en la Academia de Guerra Naval, quedó bajo el mando del Teniente 1° **Ricardo Riesco**. De los interrogadores que cumplieron funciones junto a él, recuerda a Manuel Leiva, también a **Reyes, Esparza**. Los que interrogaban con apremios físicos eran los más antiguos, como **Juan Reyes Basaur, Jaime Lazo**, Francisco Prado, Carlos Ponce, Bertalino Castillo, Francisco Lagos. Todos recibían instrucciones del Teniente **Riesco**. Finalmente, señala que los apremios físicos consistían principalmente en aplicar corriente eléctrica con un magneto, pero aclara que en su caso, nunca participó en este tipo de interrogatorio.

**34.- Declaración extrajudicial** que Juan Manuel Jofré Montenegro prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 454, quien señala que al principios del mes de octubre de 1973 fue trasbordado a la Academia de Guerra Naval como fotógrafo en práctica, junto a otros 5 compañeros y el profesor de la especialidad. En ese tiempo, el Director de la ACANAV era el Comandante Sergio Barra. En dicha repartición se formó un comando conjunto de inteligencia de las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden. Su función era fotografiar a los detenidos que llegaban a la ACANAV, solo de frente con una regla detrás, de modo de conocer su estatura, y con su identificación abajo, como una foto de carnet. Los que más salían a buscar detenidos eran Carabineros, por su conocimiento de este tipo de labor. Dicho grupo se denominaba SICAJSI y trabajaban de civil, sin cortarse el pelo. Trabajaban en todos los pisos de la ACANAV. Con el tiempo, el SICAJSI solo ocupó el 4° piso, donde había salas grandes y se mantenía a los detenidos. Su jefe directo era el Comandante Rigoberto Cruz Johnson, quien en su calidad de tal debía calificarlo.

Posteriormente, todos los detenidos fueron trasladados desde el 4° piso al cuartel Silva Palma, aledaño a la ACANAV, ocupando todas sus dependencias, ya que los marinos que había allí detenidos fueron llevados hasta la barcaza Morel. Los interrogatorios se llevaban a cabo en un primer momento en el 4° piso de la ACANAV, y posteriormente en el cuartel Silva Palma. Había un grupo encargado de esas labores, practicadas por Infantes de Marina, de entre quienes recuerda a uno llamado Manuel Leiva, conocido por ser uno de los primeros Infantes de Marina en haber ido a cursar a Panamá; al “Cicerón”, al **“Telémaco”**, y al “Sócrates”, todos de alrededor de 40 años. También trabajaba en esas labores, el IM Hernán Esparza. De entre el personal del SICAJSI, recuerda al Teniente Infante de Marina **Riesco**, quien al parecer también salía con carabineros a realizar labores operativas.

**35.- Declaración extrajudicial** que Juan Orlando Jorquera Terrazas prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 458, quien señala que para el año 1973 era de dotación de la Escuela de Infantería de Marina, donde se desempeñaba como instructor y tenía subespecialidad de comando de Infantería de Marina. A fines de septiembre de 1973, fue designado en comisión de servicio a la Academia de Guerra Naval, y al presentarse le indicaron que su función sería proceder a interrogar a personas que llegaran detenidas al cuartel Silva Palma, recinto colindante a la Academia de Guerra, pero no recuerda quien le dio dicha orden. Pasó a integrar un grupo especial de Infantes de Marina que tenían la tarea de interrogar al interior de la ACANAV, entre ellos recuerda al Suboficial Manuel Leiva, los sargentos Francisco Pardo, **Juan Reyes**, Francisco Lagos, **Jaime Lazo**, Bertalino Castillo, y **Valentín Riquelme**, todos vestían de civil y se identificaban con nombres supuestos o apodos. Para cumplir con la misión de interrogador se trasladaba hasta las dependencias del Cuartel Silva Palma, recinto habilitado para la

reclusión de las personas, ya que con antelación era un recinto de reclusión de personal naval con problemas procesales o disciplinarios. Posteriormente, procedía a identificar a los detenidos y seguidamente los interrogaba acerca de su vinculación política y si estaban involucrados en ciertos hechos constitutivos de delito que habían ocurrido en la época, para tales efectos recuerda que se les leía un cuestionario tipo. Todos los antecedentes acerca de las respuestas que los detenidos les daban, las anotaban en una hoja, pero no recuerda cuál era su destino; después esa ficha era analizada, pero desconoce quien tenía esa labor. Cabe señalar que, dependiendo del análisis en cuestión, en donde se analizaba si estaba involucrado o no en los hechos por los cuales se le interrogaba, era dejado en libertad posteriormente. Los interrogatorios eran efectuados al interior de unas oficinas de material ligero, que estaban ubicadas frente a un patio al interior del cuartel Silva Palma. En su interior se instaló un escritorio y un par de sillas, luego, cuando se ingresaba un detenido, se le consultaban las preguntas consignadas en el cuestionario tipo y nunca en dichos procedimientos procedió a maltratar, golpear, torturar, ni apremiar a ninguno de los detenidos y no tiene conocimiento que se haya realizado. Tenía conocimiento que en el 3° y 4° piso de la ACANAV también se llevaron a cabo interrogatorios de personas detenidas, pero nunca participó ni presenció alguno de ellos y quienes intervinieron, ignora si ellos eran parte del grupo especial al que él pertenecía. En cuanto a los oficiales que se le nombran en el momento de la declaración y que habrían cumplido funciones en la ACANAV, solo recuerda a un Teniente **Ricardo Riesco**, quien era Infante de Marina, jefe del grupo de los interrogadores del Silva Palma, no recuerda haberlo visto presenciando los interrogatorios, solo en ocasiones transitaba por las dependencias del Silva Palma, de los demás oficiales desconoce sus nombres.



**36.- Declaración extrajudicial** que Manuel Atilio Leiva Valdivieso prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 464, quien señala que al pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, ya ostentaba el grado de Suboficial Mayor, desempeñándose en la Escuela de Infantería de Marina de Viña del Mar. A raíz de lo acontecido, fue enviado a la Academia de Guerra Naval con una escuadra de unos 10 Infantes de Marina, ya que la Academia estaba dotada casi solamente de marinos. Su labor era distribuir al personal para las guardias y turnos de la unidad. Recuerda que en esa época se hacían interrogatorios. Nunca participó en labores operativas. Estaban ubicados en el 2° piso de la Academia. En ese periodo se les ordenó utilizar nombres supuestos, chapas. La suya era “Cicerón”. No logra recordar las chapas de otros funcionarios. Los detenidos, que eran hombres y mujeres, no estaban en celdas, sino que estaban en salas, encerrados en grupos. No recuerda haber interrogado a detenidos. De entre el personal que trabajó ahí y que se le nombra en ese momento, logra recordar a un comandante de apellido Soto-Aguilar, cuyo cargo no retiene. Además recuerda a **Jaime Lazo** quien, según recuerda, perteneció a la escuadra de Infantes de Marina que llegó con él a la ACANAV, a un Infante de Marina de apellido Lagos, recuerda también haber trabajado con el oficial I.M. **Ricardo Riesco**, aunque no puede señalar si trabajó en el cuartel Silva Palma o en la ACANAV.

**37.- Declaración extrajudicial** que Rolando Matamala Toloza prestó ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, de fojas 468, quien señala que para el año 1969 fue destinado a la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval, siendo nombrado para el Depto. Ancla-2, siendo su labor era controlar los movimientos de buques de las flotas argentina y peruano. Alrededor de 3 días antes del 11 de septiembre de 1973 todo su departamento Ancla-2 fue trasladado a la Academia de Guerra Naval, a cargo del Teniente

2° Julio Faunes. Ocuparon el 4° piso de la ACANAV. Luego del 11 de septiembre de 1973, continuaron haciendo labores de inteligencia y archivo. En la mañana de ese día, llegaron los infantes de marina, alrededor de 30, los cuales comenzaron a trabajar en el cuartel Silva Palma, aledaño a la ACANAV. Llegó también un grupo de civiles, conocidos como el doctor, el abogado, el psicólogo. Empezó a cumplir la función de trasladar detenidos desde el buque “Lebu” y el cuartel Silva Palma, siendo el Jefe militar del bus Pegaso encargado de los traslados, por el Suboficial más antiguo. Los detenidos eran trasladados al Silva Palma para los interrogatorios. Los primeros detenidos que comenzaron a llegar al Silva Palma tiene que haber sido el 14 o 15 de septiembre. De entre las personas que recuerda en la ACANAV puede señalar a Rodolfo Stange, quien llegó a ser Director General de Carabineros, ya que estaba mencionado en un listado que había en la ACANAV para efectos de alimentación, junto con otros oficiales. Recuerda además a Erwin Conn, a Franklin “El cuervo” González, Virgilio Nikolai, Juan Mackay. También recuerda al “Cebolla”, por cuanto siempre tenía críticas por ser muy severo con los prisioneros. Recuerda además a la esposa de Guilfor Aracena, quien empezó como enfermera en la ACANAV y el Silva Palma, y que luego cursó inteligencia, entrando a desempeñarse en dicha área. Otro de los enfermeros era al cabo Hidalgo, de dotación de la ACANAV, quien veía a los detenidos que salían mal de algunos interrogatorios. Recuerda además, al Oficial de mar recontratado de apellido (Santa) Cruz, que se desempeñó en el Lebu. El Jefe de la ACANAV era el Comandante Sergio Barra.

**38.- Oficio** N° 350-2018 emitido por el Subdepto Legal del Instituto de Previsión fojas 751 a 756, en el que se informa, entre otros, que **Oscar Ibaceta Jorquera** aparece como víctima de Prisión Política y Tortura, en el último informe emitido por la Comisión Valech en agosto de 201.

**39.- Oficio** N° 000005, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de fojas 815 a 816, informando que la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 26 de noviembre de 1968, no ha sido aún ratificada por Chile, encontrándose actualmente sometida a la aprobación del H. Congreso Nacional, específicamente, en la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, para informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, desde el 4 de diciembre de 2012. Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado precedentemente, el aludido instrumento, en cuanto tratado internacional propiamente tal, no ha entrado aún en vigor para nuestro país. No obstante lo anterior, las disposiciones de dicha Convención referidas a la imprescriptibilidad de los delitos allí establecidos se han aplicado en el orden jurídico chileno como parte del derecho internacional consuetudinario, y por lo tanto, vinculantes para Chile. Así lo ha reconocido la reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

**40.- Ordinario** N° 172 del Depto. de Extranjería y Policía Internacional de Valparaíso, de la PDI de fojas 818 a 818 vuelta, que informa que realizadas las consultas en el terminal computacional de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, los acusados no registran movimientos migratorios entre enero de 1974 y diciembre de 1975; haciendo la prevención de que el periodo histórico entre los años 1969 y 1981, presenta lagunas de información, debido a los motivos que ahí señala.

**41.- Certificados** de fojas 875 a fojas 886, respecto de cada uno de los acusados de autos, en donde se indican los procesos seguidos ante este Ministro en Visita Extraordinaria en los que figuran en calidad de procesados y/o sentenciados, según corresponda, por su responsabilidad en los delitos se

detenciones ilegales, secuestro con grave daño y aplicación de tormentos o tortura, delitos inferidos principalmente en el cuartel Silva Palma de Valparaíso, inmediatamente después de producido el golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973, y en donde se indican cada una de las víctimas objeto de los delitos ya mencionados, hechos ocurridos en el cuartel ya mencionado.

**42.- Resúmenes de hojas de vida** de cada uno de los acusados de autos, rolantes desde **fojas** a , en donde se indican las destinaciones y funciones cumplidas por ellos y relacionados con el tiempo que la víctima Oscar Ibaceta Jorquera permaneció detenida en el cuartel Silva Palma de Valparaíso.

**Noveno:** Que los medios de prueba enumerados y desarrollados en el considerando precedente, debidamente analizados y ponderados conforme a la normativa probatoria del Código de Procedimiento Penal y relacionados entre sí conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, constituyen un conjunto suficiente de presunciones judiciales que reúnen todos y cada uno de los requisitos que exige el artículo 488 del ya señalado código, permitiendo tener por fundado y legalmente acreditado en este proceso, los siguientes hechos:

Que, Oscar Ibaceta Jorquera es secuestrado en febrero de 1974 por efectivos de la Armada de Chile, al momento en que la víctima, que a esa fecha tenía 14 años de edad, acude a la Academia de Guerra Naval ubicada en la ciudad de Valparaíso, con el fin comparecer a la citación que fue dejada en su domicilio, bajo la amenaza de que si no se presentaba en el lugar señalado, sus amigos -que ya se encontraban detenidos- no saldrían en libertad.

En este recinto, la víctima es objeto de apremios físicos y psicológicos, que se traducen en amenazas a su vida e integridad física y la de sus amigos, simulacros de fusilamiento, privación del sueño y de la satisfacción de necesidades

fisiológicas, golpes de pies y puño, y aplicación de corriente eléctrica en sus manos e ingle.

Permaneció detenido en el Cuartel Silva Palma durante 20 días, quedando con la obligación de firmar semanalmente en la Comisaría de Carabineros de Cerro Alegre, lo que llevó a cabo durante 11 meses.

**C.- En cuanto a la calificación del delito:**

**Décimo:** Que, conforme al mérito de autos, se estima que los hechos descritos en el considerando precedente, si bien han sido relacionados con los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos, determinación a la cual se adhiere el acusador particular, de acuerdo a lo que se expresa en lo principal de fojas 706, el Tribunal estima que en rigor sólo es aplicable la primera de las figuras penales mencionadas.

En efecto, para alcanzar dicha conclusión, es necesario analizar la normativa vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos, señalando al efecto el inciso tercero del artículo 141 del Código Penal, referido al delito de secuestro que “si el encierro o la detención se prolongare por más de noventa días, o si de ellos resultare un daño grave en la persona o intereses del encerrado o detenido, la pena será presidio mayor en cualquiera de sus grados”; en tanto el artículo 150 número 1, a propósito del delito de aplicación de tormentos, señala que “sufrirán las penas de presidio y reclusión menores y suspensión en cualquiera de sus grados: 1° Los que decretaren o prolongaren indebidamente la incomunicación de un reo, le aplicaren tormentos o usaren con él de un rigor innecesario”.

Que, sentado lo anterior, corresponde establecer si la normativa recién descrita es aplicable a los hechos constituye dos delitos diferentes o si es posible por lo menos subsumir uno respecto del otro.

En efecto, conforme a lo que se ha establecido, ha quedado acreditado en forma fehaciente a través de los medios de prueba ya pormenorizados, que en el mes de Febrero del año 1974 es

secuestrada la víctima de 14 años de edad, Oscar Ibaceta Jorquera, quien acude a la Academia de Guerra Naval de Valparaíso, entidad a cargo de la Armada de Chile, alertado de que los marinos requerían su comparecencia, bajo la amenaza de que si no presentaba, los amigos de la víctima, que ya se encontraban detenidos, no saldrían en libertad.

Ocurrido lo anterior, Oscar Ibaceta Jorquera es o objeto de apremios físicos y psicológicos, los que se traducen en amenazas a su vida e integridad física, simulacros de fusilamientos, privación del sueño y de la satisfacción de necesidades fisiológicas, golpes de pie y puño y aplicación de corriente eléctrica en sus manos e ingle.

Que el período de detención aplicación de tormentos se extendió por 20 días aproximadamente, quedando con la obligación de firmar en un recinto policial, lo que cumple durante 11 meses,

Que producto de todo lo anterior y conforme se desprende del informe psicológico de fojas 82, la víctima evidencia daño emocional, familiar y psicosocial, revelándose sentimientos de amenaza y desorganización vital, postergación de los procesos evolutivos y disminución de espacios de desenvolvimiento, desarraigo familiar y políticos que afecta sus procesos evolutivos e identitarios, como el sentido de pertenencia.

En virtud de lo anterior, el Tribunal descartará el delito de aplicación de tormentos, establecido en el artículo 150 número 1 del Código Penal, por encontrarse subsumido en el presente caso en el ilícito de secuestro con grave daño y porque la referida aplicación de tormentos es una de las variantes del daño configurador de uno de los elementos del tipo penal calificado de secuestro. Por último, en la especie se encuentra establecida una privación de libertad que no estuvo revestida de legalidad alguna que exija nuestro ordenamiento jurídico y que si bien no se prolongó durante 90 días, sí le provocó a la víctima un daño grave en su persona, debiendo agregarse que dicha detención

fue motivada por la pertenencia de la víctima a las Juventudes Comunistas, esto es, existieron razones ideológicas que estuvieron presentes en toda la situación planteada.

En razón de lo anterior, se concluye que la norma aplicable en la especie para los efectos de sancionar los hechos constitutivos del delito que se investiga, es el secuestro con grave daño, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal, vigente a la época de los hechos.

**D.- En cuanto a la participación de los acusados:**

**Décimo Primero:** Que, prestando declaración indagatoria el acusado **Ricardo Alejandro Riesco Cornejo** en los hechos que se investigan, a fojas 91, señala que, respecto a las personas menores de edad que habrían sido detenidas y llevadas a la Academia de Guerra Naval y al Cuartel Silva Palma, mientras él estuvo entre octubre de 1973 y diciembre de 1974 en la Academia de Guerra, nunca vio a personas detenidas menores de edad, hombres y mujeres, solo eran detenidas personas adultas. La mayoría de quienes llegaban eran infractores del toque de queda, los que quedaban en libertad al día siguiente. En la Academia de Guerra, él conformaba un equipo operativo que cumplía tareas ordenadas por el SICAJSI, por ejemplo, detener a alguna persona determinada en alguna dirección, o realizar investigaciones que se disponían. Aclara que no fue interrogador en la Academia de Guerra Naval. Cuando por ejemplo, les ordenaban buscar a alguna persona y la llevaban, esa persona quedaba a cargo del Suboficial Mayor Leiva que era quien dirigía a los interrogadores.

Se agrega a esto la declaración extrajudicial prestada ante la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que rola a fojas 287 de estos autos, en la cual señala que, según tiene noción, fue después de 14 de septiembre de 1973, que fue destinado a la Academia de Guerra Naval, no pudiendo precisar la fecha exacta. Cuando llegó a Academia se presentó ante el Director de la Academia de Guerra y también era el Jefe del SICAJSI

(Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior), el Capitán de Navío Sergio Barra y el Subdirector era el Capitán de Fragata Rigoberto Cruz Johnson, recibiendo instrucciones del primero para cumplir labores netamente operativas, recibía ordenes escritas firmadas por el Director del SICAJSI, de detenciones de personas, allanamientos en búsqueda de armamento, producto de los interrogatorios que se realizaban en la Academia de Guerra y el Cuartel Silva Palma, para ello existía una unidad de análisis que procesaba la información recabada de los detenidos. Aclara que nada se hacía sin una orden escrita. Para ello salía con gente de la Infantería de Marina, de los que recuerda, **Juan Reyes Basaur, Jaime Lazo Pérez, Esparza**, salían vestidos de civil. También participó en interrogatorios, pero siempre en el Cuartel Silva Palma y con las personas que señaló. Nunca utilizó ni participó en interrogatorios utilizando magnetos ocasionando golpes eléctricos, y en su caso, siendo franco, a lo máximo daban golpes físicos. Sus interrogatorios, junto con las personas que el acusado nombró, eran más con apremios psicológicos, él personalmente nunca había visto este tipo de interrogatorio, y que -con la misma franqueza señala- solamente haberlos visto en el Buque Escuela Esmeralda. El Suboficial Mayor de Infantería de Marina Manuel Leiva Valdivieso, era el más antiguo de los interrogadores en el Cuartel Silva Palma, y el comandante de este recinto era el Oficial de Mar Abel Osorio Rojas. A la pregunta que se le formula, nunca estuvo presente en algún interrogatorio en la Academia de Guerra Naval, sí sabía que los detenidos permanecían en el cuarto piso.

**Décimo Segundo:** Que, prestando declaración indagatoria el acusado **Juan de Dios Reyes Basaur** en los hechos que se investigan, a fojas 93, señala que estuvo como interrogador en el Cuartel Silva Palma entre octubre de 1973 hasta comienzos de 1975. Le tocó interrogar a diferentes personas, todos adultos y varones, nunca interrogó o maltrató niños y adolescentes, ni



mujeres menores de edad. Estima que la denuncia en esta causa, y de otras personas menores que en esa época eran menores de edad, con falsas y solo buscan obtener un beneficio económico, es gente que quiere obtener dinero del Estado, aprovechándose de esta situación. Inventar falsedades no cuesta nada. Es más, han pasado 42 años (a la época que prestó declaración) y están haciendo la denuncia recién ahora. Tampoco vio detenidos niños o adolescentes o niñas, que hubieran sido controlados por las fuerzas armadas. Tampoco supo ni tuvo conocimiento que hubieran sido detenidos menores de edad y maltratados por personal de la Armada. Finalmente, estima que la gente de la Armada nunca se hubiese prestado para maltratos a menores de edad, teniendo la absoluta convicción que la Armada no está involucrada en tales hechos.

Se agrega a esto la declaración extrajudicial prestada ante la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que rola a fojas 263 de estos autos, en la cual señala que para el 11 de septiembre de 1973 era Cabo 2° e Instructor de la Escuela de Infantería de Marina y el día siguiente, 12 de septiembre de 1973, por orden del Capitán de Corbeta Gabriel Sánchez Buzeta, Jefe de Estudios, fue destinado a la Escuela de Armamentos, en el sector de Las Salinas, permaneciendo ahí hasta mediados de octubre de 1973, realizando patrullajes en el sector de Santa Inés y requisando mercadería en los negocios chicos. Agrega que a la Escuela de Armamentos también llegaban detenidos y eran interrogados por personal designado en la cual nunca estuvo involucrado.

En octubre de 1973 fue destinado al Cuartel Silva Palma, donde al comienzo fue designado a hacer guardia y custodia de detenidos y al poco tiempo fue designado para trabajar exclusivamente en los interrogatorios de detenidos. Su superior directo era el Teniente 2° Infante de Marina **Ricardo Riesco Cornejo**, sobre éste jerárquicamente estaba el Capitán de Corbeta Infante de Marina Hernán Soto-Aguilar Cornejo. En

estas funciones se le asignaron la chapa de “Telémaco”, para que nadie de sus colegas supiera su identidad. El que supervisaba todos los interrogatorios era el Suboficial Mayor Infante de Marina Manuel Leiva Valdivieso, que usaba la chapa “Cicerón”, también había otro interrogador de su grado y también Infante de Marina **Jaime Lazo Pérez** apodado “Sócrates”. Otros de los Infantes de Marina que interrogaban en el Cuartel Silva Palma, estaban los Cabos Carlos Ponce Álvarez, Eugenio Pinto Salas, **Tuba (Eduardo) Núñez Contreras**, Miguel Concha Rivera y Bertalino Castillo Soto.

El Capitán Soto-Aguilar era el que decidía a quien interrogar, para ello había un documento que se les entregaba, con los datos civiles del detenido y de qué había que preguntarle y qué era lo que interesaba sacarle como información. Hubo varios tipos de interrogatorio, el científico, que eran más que nada apremios psicológicos, y estaba el otro más cruel, donde se usaba un magneto que generaba electricidad. Cuando se interrogaba a un detenido, se usaba cualquiera de las cuatro salas especiales para ello, a la persona vendaba su cara. Si no colaboraba se pasaba a un interrogatorio más cruel con apremios físicos. Los motivos de estos interrogatorios eran conocer la estructura de la gente del MIR, MAPU, búsqueda de armamento, entre otras cosas. El acusado aclara que para ese momento, ellos estaban instruidos de que estaban en una guerra y que estaban combatiendo a gente subversiva, y de hecho, en su casa, encontraron armamento de guerra en varias casas de Valparaíso producto de estos interrogatorios. Dentro de las personas importantes que le tocó interrogar, fue un médico del MIR, que después se lo llevó personal de la DINA a Santiago, ya que era importante dentro de esa estructura. Lo interrogó sin apremios físicos, estuvo un día completo con él, incluso lo interrogó sin vendas. También le correspondió interrogar mujeres, aunque aclara que no se interrogaba no siempre era con apremios físicos.

**Décimo Tercero:** Que, prestando declaración indagatoria el acusado **Valentín Evaristo Riquelme Villalobos** en los hechos que se investigan, a fojas 182, señala que para el 11 de septiembre de 1973 era instructor de la Escuela de Infantería de Marina, pero ese día en específico le tocó asumir como Sargento de relevo, debido a que la guardia de la Escuela fue derivada a distintos lugares después del pronunciamiento militar. Llegó a la Academia de Guerra Naval a fines de septiembre de 1973, junto al Comandante Soto-Aguilar, luego llegó el otro grupo de Infantes de Marina, quienes se hicieron cargo de las labores de interrogatorio por orden del Comandante Barra, director de la Academia de Guerra Naval. Soto-Aguilar fue relevado por **Ricardo Riesco**, y Riesco fue relevado por Carlos González. Ellos estaban a cargo del grupo de infantes, independiente de que pertenecieran al Ancla-2 o Ancla-3.- Soto-Aguilar estuvo muy poco tiempo porque él era jefe del Centro de estudios de la Escuela de la Infantería de Marina. Los primeros días en la Academia de guerra Naval, los detenidos estaban en el tercer piso en una sala grande (sala de conferencias), y ahí también estaban las oficinas de interrogatorio. Pero ese piso se hizo pequeño para los detenidos que iban llegando, por lo que se habilitó el Cuartel Silva Palma, construyéndose una media agua en la cual se hicieron cubículos de interrogatorio. Tanto los detenidos como los interrogadores fueron trasladados para allá.

Ellos como interrogadores, no tenían como función detener, de eso se encargaban los COC. Ellos interrogaban en salas de interrogatorio, con un escritorio y sillas, no había salas de tortura. No tenían órdenes de torturar, ni de golpear a nadie, tampoco les dieron tácticas específicas de interrogatorio, el equipo de interrogadores sabía cómo hacerlo.

Su dupla de interrogatorio era Francisco Prado Espejo (fallecido), y generalmente los interrogatorios eran presenciados por el Suboficial Mayor Leiva (fallecido), quien era muy estricto a la hora de que no se aplicaran torturas o malos tratos a los

detenidos. Leiva era su jefe directo, y más arriba venía el Teniente Riesco, quien supervisaba las labores de los interrogadores y de los COC. En cuanto a su labor como interrogador, tuvo ciertas lagunas en las cuales tenía que dedicarse a otros temas, relacionados con asuntos externos.

Respecto a los “toqueteos” que algunos detenidos señalan haber sufrido, no había más toque que cuando se registraba al detenido para verificar que no tuviera algún arma o algo más escondido, que era parte de la operación RASEA (Registrar, apartar, silenciar, evacuar y asegurar), era parte de un procedimiento normal. Pudo existir que alguien se propasara en esas instancias.

El acusado estuvo cumpliendo funciones en el cuartel Silva Palma hasta diciembre de 1975 aproximadamente, ya que fue trasladado nuevamente a la Escuela de infantería de marina a hacer un curso de perfeccionamiento.

Respecto a la víctima de estos autos, Riquelme Villalobos señala no conocerlo, no reconoce para nada su nombre. Asegura que no le tocó interrogar menores, pero no puede asegurar que no haya habido, ya que también había carabineros, de investigaciones y militares que interrogaban.

Se agrega a esto la declaración extrajudicial prestada ante la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que rola a fojas 391 de estos autos, en la cual señala que a la fecha de ocurrido el pronunciamiento militar, con el grado de Sargento 2° se desempeñaba como instructor en la Escuela de Infantería de Marina. A fines del mes de septiembre o a inicios de octubre de 1973, el Capitán I.M. Gabriel Sánchez Buzeta, también instructor de la Escuela de Infantería de Marina, le comunicó que por orden superior debía presentarse a la Academia de Guerra Naval.

De esa forma, junto al entonces Capitán de Fragata I.M. Hernán Soto-Aguilar, fueron destinados desde la Escuela de Ingeniería de Marina a la Academia de Guerra Naval, llegando a

presentarse a la oficina de “Detallía” o Ancla-1, que correspondía a la Sección de Personal. De esa manera, el Capitán Soto-Aguilar se hizo cargo de un grupo de Infantes de Marina, con la misión de interrogar detenidos. En esas funciones trabajaban unos 8 funcionarios: Francisco Prado Espejo, Francisco Lagos Garcés, Miguel Concha, Manuel Leiva, Bertalino Castillo, Juan Jorquera y Carlos Ponce, todos quienes habían trabajado como instructores de la Escuela de Infantería de Marina. Para su labor usaban un nombre operativo o “chapa”, en su caso era “Gerónimo”.

Para realizar los interrogatorios usaban una oficina en el segundo piso. Los prisioneros eran tratados por vigilantes y llegaban con la vista vendada a la sala de interrogatorio, en donde eran esperados por una pareja de interrogadores. Esta pequeña sala contaba con un escritorio y un par de sillas. A los prisioneros les preguntaban sus datos personales, filiación política y motivo de su detención que, generalmente, era debido a denuncias en su contra o por militar en algún partido político de la Unidad Popular.

En su caso, trabajaba con el Sargento 1° I.M. y comando Francisco Prado Espejo, al parecer de nombre operativo “Wilfredo”. Personalmente, en su caso no utilizaba violencia física ni psicológica. En los casos en los que le correspondía interrogar mujeres, se solicitaba la presencia de una Oficial de Carabineros para asegurarse que no se cometieran excesos. De las respuestas que daban los prisioneros se dejaba constancia manuscrita que luego era entregada a la Sección de Análisis. En el inicio de su trabajo como interrogador, como jefe de los Infantes de Marina encargado de interrogar prisioneros en la Academia de Guerra Naval se encontraba el Capitán de Fragata I.M. Hernán Soto-Aguilar, quien fue reemplazado por el Teniente 1° I.M. **Ricardo Riesco Cornejo**, en el año 1974 aproximadamente.

Los interrogatorios eran presenciados y supervisados por oficiales navales, quienes ingresaban y hacían preguntas para precisar las respuestas sobre temas que les interesaban. En estas funciones recuerdo a los comandantes Hernán Soto-Aguilar y Juan Mackay, quien era un oficial muy conocido ya que siempre pasaba ronda y vigilaba los trabajos que se realizaban en la Academia de Guerra Naval; también recuerda en estas tareas a su sobrino, el Teniente Rafael Mackay, quien fue su alumno en la Escuela Naval y llegó proveniente de la “Esmeralda”. Entre los carabineros en estas tareas recuerda al Coronel Trobok y el Capitán Corrales.

Según recuerda, antes de la navidad de 1973, los grupos de interrogadores que trabajaban en la Academia de Guerra Naval, fueron trasladados al Cuartel Silva Palma. En este lugar se acondicionaron unas salas en las cuales existían unos focos que alumbraban a los prisioneros e impedían que éstos tomaran contacto con sus interrogadores. No obstante, la oficina de análisis siguió funcionando en dependencias de la Academia de Guerra Naval.

**Décimo Cuarto:** Que, prestando declaración indagatoria el acusado **Guillermo Tomás Morera Hierro** en los hechos que se investigan, a fojas 109, señala que no fue interrogador del Cuartel Silva Palma y de ningún lugar, su labor fue de custodiar a los detenidos en ese cuartel para que no se arrancaran, esto lo hacía cuando él estaba de guardia, que era un día por cada 4 o 6, dependiendo de la disponibilidad de Oficiales y además supervisaba la custodia. Cuando no cumplía esta función era porque estaba realizando labores propias de su cargo, que era la de Oficial artillero del Cuartel y de instrucción de Marineros.

Morera Hierro declara haber sido de dotación del Cuartel Silva Palma y era Teniente 2° de Reserva Naval. No sabe quiénes eran los interrogadores, hasta el día de hoy no sabe sus nombres. Las instrucciones que recibió del Capitán Santa Cruz, quien era el que estaba a cargo del Cuartel, era que no tuvieran

contacto con los interrogadores ni que interactuaran con ellos, lo que él cumplió a cabalidad.

Asegura no haber visto detenidos menores de edad, o al menos de apariencia de menores de edad, ya que el Capitán Santa Cruz no lo habría permitido. Él presenció en una oportunidad que habían llevado detenidos a menores de edad, que el Capitán Santa Cruz discutió con su superior jerárquico por ello y no permitió el ingreso al Cuartel Silva Palma de estos menores de aproximadamente 16 años.

Tampoco vio si es que torturaban a los detenidos, no vio cuando se les interrogaba pues nunca presenció un interrogatorio ya que lo tenían prohibido, esa función era de los interrogadores, quienes no andaban solos, siempre eran dos o más. Finalmente, señala que la sala de interrogatorio era una sala de 16 metros cuadrados en donde había un escritorio y mínimo 2 sillas, no había nada que separara al interrogador del detenido a quien se interrogaba, como una muralla, paneles o ventanas.

**Décimo Quinto:** Que, prestando declaración indagatoria el acusado **Alejo Esparza Martínez** en los hechos que se investigan, a fojas 139, señala que la segunda semana de octubre de 1973, aproximadamente, fue destinado al Cuartel Silva Palma, ubicado en Playa Ancha, donde estuvo unos 4 meses más o menos, actuando como interrogador de personas detenidas, por denuncias de toda índole, la mayoría porque eran opositores al Gobierno Militar.

Su participación al interrogar a los detenidos, que eran todos hombres, fue siempre correcta, era una conversación con el detenido tratando de que proporcionara algún antecedente, no se les trataba con presión de ningún tipo, ni psicológica y menos física. Cuando el detenido no proporcionaba la información que esperaba, había que informarle al Jefe, don Manuel Leiva (fallecido), quien venía personalmente y como tenía una voz fuerte, los detenidos se asustaban y daban más datos acerca de

lo que se les preguntaba. No le tocó interrogar mujeres y menos niños.

Dejó de estar en el Cuartel Silva Palma a mediados de 1974 y fue destinado al control de extranjeros, trabaja en una oficina ubicada en el segundo o tercer piso de la Academia de Guerra Naval, que estaba al lado del cuartel.

Se agrega a esto la declaración extrajudicial prestada ante la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que rola a fojas 439 de estos autos, en la cual señala que para el año 1973 era de dotación de la Escuela de Infantería de Marina, se desempeñaba como instructor y además tenía la subespecialidad de comando.

Días después de ocurrido el pronunciamiento militar fue trasladado hasta la Academia de Guerra Naval junto con otro infante, el cabo Francisco Lagos. La misión que debieron cumplir en ese lugar, según lo que le informaron, fue inicialmente la de integrar un grupo operativo dedicado a la detención de personas en la V Región, para resguardar el orden y la seguridad pública, las cuales posteriormente debían ser derivadas a la Comisaría de Carabineros del sector. Pero a los días después se le ordenó integrar un grupo de interrogadores compuesto únicamente compuesto únicamente de Infantes de Marina, entre lo que puede mencionar a Manuel Leiva, quien era el más antiguo. Francisco Lagos, Carlos Ponce, Miguel Concha, todos quienes estaban a cargo del Teniente **Ricardo Riesco** y debían proceder a interrogar a las personas que estaban detenidas en el Cuartel Silva Palma, específicamente en unas salas ubicadas frente a un patio o cancha de baby fútbol.

Respecto a los interrogatorios, debe indicar que ellos no utilizaban cuestionarios, en el momento que les iban consultando generalmente por la ubicación de armamento. Los detenidos permanecían en todo momento vendados para que no reconocieran o identificaran a los interrogadores, estaban sentados en una silla y con sus manos vendadas, una vez concluido dicho procedimiento, los regresaban a sus celdas o



habitación de reclusión, las que estaban ubicadas en la guarnición de orden y seguridad.

Cabe indicar que no recuerda haber visto oficiales durante los interrogatorios, pero sí vio a **Ricardo Riesco** al interior del cuartel Silva Palma, desconociendo qué hacía, presume que controlaba a los interrogadores, él solo pedía cuenta de los procedimientos al Suboficial Manuel Leiva.

**Décimo Sexto:** Que, prestando declaración indagatoria el acusado Eduardo Mauricio Núñez Contreras en los hechos que se investigan, a fojas 164, en la que señala que se desempeñaba como instructor de la Escuela de Infantería de Marina, en Viña del Mar, hasta el momento en que ocurre un accidente donde muere un oficial de la Armada, por el cual se le acusa de cuasidelito de homicidio. En causa Rol 3566, de la Fiscalía Naval de Valparaíso, fue declarado reo con fecha 22 de mayo de 1972, pero bajo libertad provisional, volviendo a sus labores en la Escuela de Infantería de Marina. Aproximadamente en noviembre de 1973 quedó absuelto de los cargos, por resolución de la corte marcial. Para ese momento, ya se encontraba cumpliendo funciones en la Academia de Guerra Naval.

Fue asignado a una patrulla con un oficial de reserva a cargo, el teniente Rosas, y personal de carabineros e investigaciones. Recuerda que el jefe de todas las patrullas era un coronel de carabineros cuyo nombre no recuerda. Sus funciones consistían en patrullar el cordón industrial para controlar la posible instalación de tomas y en trasladar detenidos desde las comisarias hasta el cuartel Silva Palma. Nunca detuvieron personas ni hicieron allanamientos ni otro tipo de procedimiento. Ocupaban un Peugeot 404. Entregaban a los detenidos en la guardia del cuartel Silva Palma, no sabían que más podía suceder con los detenidos. El procedimiento de retiro y entrega de los detenidos era el siguiente: pasaban a la comisaría a buscar al detenido, el que les era entregado con una orden escrita. Una vez en su custodia, lo revisaban para

constatar si venía de buenas condiciones y si tenía todos sus objetos personales. Una vez verificaban que estaba todo en orden, lo trasladaban al cuartel Silva Palma, donde entregaban el detenido en la guardia, junto con la orden escrita; la guardia lo pasaba a enfermería para que lo revisaran, y si estaba en buenas condiciones el detenido se quedaba en el recinto y ellos podían retirarse. Desea dejar en claro que ellos trasladaban a los detenidos esposados, como cualquier otro detenido, y nunca encapuchados o con vendas en los ojos.

Estuvo cumpliendo funciones en la ACANAV hasta febrero de 1977 ya que luego vuelve al Cuerpo de Infantería de Marina debido a los problemas limítrofes que Chile tenía con Argentina. Finalmente aclara que no era interrogador, nunca le tocó interrogar. Tenían prohibido ingresar a las dependencias del cuartel Silva Palma. Agrega que, de hecho, **Valentín Riquelme** le pidió para que estuviera en la ACANAV, pero cuando él llegó estaba en el Cuartel Silva Palma. No tiene conocimiento de que hubiese detenidos en la ACANAV durante el tiempo que él desempeñó funciones ahí. No tiene nada que ver con las funciones de interrogador, por lo que está siendo acusado por algo que él no hizo. No se podía preguntar nada, porque si lo hacía lo tildaban de comunista. Le tocó trasladar solo detenidos adultos, nunca adolescentes. Nunca le tocó trasladar mujeres. Nunca tuvo apodo.

**Décimo Séptimo:** Que, prestando declaración indagatoria el acusado **Héctor Vicente Santibáñez Obreque** en los hechos que se investigan, a fojas 144, en la que señala que en noviembre de 1973 ingresó al cuartel Silva Palma, como cabo Infante de Marina, no recuerda muy bien la fecha, sus funciones en ese lugar eran la de interrogador de los detenidos que llegaban al cuartel. Empezaban el día con una reunión con el Suboficial Leiva, quien asignaba las tareas. Su jefe, que era el Sargento Ponce, recibía el formulario de la persona (información del detenido, antecedentes personales, y causa por la que se le

detuvo), luego se iban a una sala con una mesa y tres sillas y comenzaban a hacerle preguntas y cuestionar sus respuestas. Él solo interrogaba a hombres ya que había funcionarias de carabineros que interrogaba a las mujeres, no recuerda sus nombres.

El Sargento Ponce y él nunca maltrataron a las personas detenidas, les hacían notar a los detenidos que estaban equivocados en su accionar, si no tenían respuesta en un tiempo prudente les decían al guardia que se lo llevaran, pero nunca estaban mucho tiempo con los detenidos. Nunca le tocó interrogar a una persona herida o maltrecha, estaban vestidos normal, nunca vio a una persona desnuda.

Dejó de trabajar en el cuartel Silva Palma la segunda semana de 1975, porque se fue como alumno en la Escuela Naval durante un año, egresando en marzo de 1976.

Respecto a la víctima de autos, no la conoce, nunca se relacionó con menores de edad. A los tormentos que él dice haber pasado en su querella, no cree que haya pasado por todo eso.

Se agrega a esto la declaración extrajudicial prestada ante la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que rola a fojas 494 de estos autos, en la cual señala que durante los primeros días de diciembre de 1973 retornó a Valparaíso, luego de cumplir funciones en la ciudad de Santiago, siendo destinado en comisión de servicio a la Academia de Guerra Naval, en donde se presentó con el Capitán de Fragata Hernán Soto-Aguilar, quien le pidió que debía desempeñarse como su protección personal. A los días siguientes, fue enviado al Hospital Naval en calidad de enfermo simulado, con la finalidad de lograr establecer el dialogo con un extremista que estaba hospitalizado en dicho recinto. En los primeros días de enero de 1974, fue devuelto a la Academia de Guerra Naval, en donde le ordenan integrar un grupo de Infantes de Marina que se desempeñaban como interrogadores en el cuartel Silva Palma. Esta función la cumplió durante un

mes aproximadamente, específicamente debía dictar un cuestionario a cada persona que estaba detenida en calidad de “sospechosa” o “subversiva”, luego debían transcribir las respuestas de la persona y finalmente tenían que confeccionar un informe con todos los resultados. Desconoce quien redactaba dicho cuestionario y hacia donde se remitía después el informe con el resultado de las respuestas de los detenidos. En estos procedimientos no hubo violencia física, ni psicológica, recuerda que participaban dos infantes, correspondiéndole generalmente con el Sargento Carlos Ponce. Cabe pensar que la persona interrogada permanecía sentada en una silla, con sus manos libres y vista descubierta.

Del grupo dedicado a interrogar a las personas, era un total aproximado de 9 personas, entre los que puede mencionar al Suboficial Manuel Leiva, Sargento Carlos Ponce, Sargento Prado, Sargento **Juan Reyes**, Sargento **Riquelme**, Sargento Castillo, y el Cabo **Esparza**, todos se subdividían en grupos, en su caso integraba el “grupo 5”. Este grupo estaba a cargo del Teniente I.M. **Ricardo Riesco** y sobre él estaba el Capitán de Fragata I.M. Hernán Soto-Aguilar.

Cabe indicar que cuando efectuaban los interrogatorios, ocasionalmente llegaban a las salas en donde se encontraba el Teniente **Ricardo Riesco**, con la finalidad de presenciar y supervigilar el procedimiento, inicialmente el acusado pensaba que era para aprender, pero después se dio cuenta que era un control hacia el procedimiento que ellos hacían como interrogadores. Estas visitas también las hacían los Tenientes Aguayo, Mackay Backler, De Aretxabala, quien era conocido como “El Príncipe”, asimismo concurría personal de Carabineros, pudiendo nombrar al Mayor Morales, quien también presenciaba los interrogatorios.

**Décimo Octavo:** Que, prestando declaración indagatoria el acusado **Jaime Segundo Lazo Pérez** en los hechos que se investigan, a fojas 150, en la que señala que para septiembre de

1973 se encontraba trabajando en el Fuerte Vergara, Escuela de Infantería de Marina, ubicada en Las Salinas, Viña del Mar, desempeñándose como instructor de armamento menor hasta el año 1984. Para el golpe del año 1973 salía a patrullar las zonas de Agua Santa para mantener el orden, trabajó durante 3 o 4 días, luego le ordenaron silenciar el canal 4, silenciar la radio “Reloj” de Agua Santa, después de eso estuvo acuartelado hasta mediados de octubre de 1973 y luego lo trasladaron a Casablanca a la Comisaría de Carabineros en el mes de febrero de 1974 y a principios de marzo de 1974 llegó a la Academia de Guerra Naval. En dicho recinto su trabajo era de interrogador de los detenidos varones que iban llegando, esto era de vez en cuando, porque llegaban muy pocos solo por problemas vecinales. El acusado se cumplía sus funciones en el patio del cuartel Silva Palma, donde había casetas para interrogar. En los interrogatorios él trabajaba solo, a veces llegaba un compañero para ver si lo estaban haciendo bien y el su guardián era un vigilante de quien no recuerda el nombre. Señala no haber maltratado a personas, nunca vio a personas heridas ni maltrechas. Dejó de trabajar en el cuartel Silva Palma en julio de 1974.

Finalmente declara no conocer a la víctima de autos, ya que para la fecha en que ocurren los hechos él se encontraba cumpliendo funciones en Casablanca entre noviembre de 1973 y fines de febrero de 1974.

Se agrega a esto la declaración extrajudicial prestada ante la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que rola a fojas 266 de estos autos, en la cual señala que, para el 11 de septiembre de 1973, siendo dotación del Fuerte Vergara, fue destinado a la localidad de Casablanca para realizar patrullajes y diferentes labores de seguridad interior. En esta función estuvo pocos días, siendo luego destinado al cuartel Silva Palma, al grupo de interrogadores formado por unos diez infantes de marina y navales. Para ello se les dio formación en interrogatorios, por

personal oficial del Ejército y Civiles que llegaron desde Santiago. Su jefe directo, en el grupo de interrogadores fue el Suboficial Mayor I.M. Manuel Leiva, también dentro del grupo de interrogadores estaban los Infantes de Marina Francisco Prado, **Juan Reyes Basaur**, Anselmo Aravena Aravena, Juan Jiménez, de los que recuerda; todos utilizaban nombres operativos, en su caso era “Sunset”.

El Comandante del cuartel Silva Palma era el Capitán de Fragata Abel Osorio. Los Oficiales que interrogaban en el cuartel Silva Palma, recuerda al Teniente 2° **Ricardo Riesco Cornejo**, al Oficial I.M. Hernán Soto-Aguilar, al oficial naval Juan Mackay, los dos últimos también interrogaban en la ACANAV y se manejaban en ambos sectores. En el caso del acusado, siempre interrogó en el cuartel Silva Palma.

Respecto a las salas de interrogatorio, existían como unas seis o siete salas habilitadas para tal efecto. A los detenidos se les mantenía tanto en el cuarto piso de la ACANAV como en el cuartel Silva Palma. La decisión de a quien se debía interrogar era de los oficiales, para ello se les entregaba el currículum del detenido, y el objetivo de qué preguntar. Dentro de las personas que le tocó interrogar, recuerda vagamente a un abogado, a un médico, entre otras personas de las que no recuerda sus identidades. No le tocó interrogar mujeres. Producto de los antecedentes que salían de estos interrogatorios, recuerda haber salido en algunas oportunidades a detener personas, para lo cual utilizaban vehículos particulares, específicamente camionetas y acompañados de personal de apoyo, tanto infantes de marina como navales. Los que hacían los allanamientos vestían de civil y el personal de apoyo estaba en tenida de combate con ropa de mezclilla y casco. En el cuartel Silva Palma existían dos tipos de interrogatorio, dependiendo de qué tipo de persona se iba a interrogar, uno era con apremios psicológicos y otro era con apremios físicos, para ello se usaba un magneto que daba golpes eléctricos al detenido. En caso del acusado, él

señala nunca haber estado en la segunda clase de interrogatorios. Tiene noción que ese tipo de interrogatorio se practicaba más en la Academia de Guerra Naval, donde llegaban los detenidos más comprometidos, involucrados en la subversión, que pertenecían a grupos paramilitares.

Además, se agrega a esto la declaración extrajudicial prestada ante la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que rola a fojas 354 de estos autos, en la cual señala que, en el año 1974, no recuerda la fecha exacta, fue enviado en comisión de servicio a la Academia de Guerra Naval, para cumplir tareas junto con un grupo de unos diez o doce infantes de marina, interrogando a los prisioneros que llegaban a este recinto naval. De la compañía que estaba en Casablanca, fueron destinados los Sargentos Francisco Lagos, Francisco Prado, Bertalino Castillo, y el acusado. Al llegar a la ACANAV, también recuerda a Manuel Leiva y a **Alejo Esparza**. El Suboficial Leiva cumplía la función de enlace del equipo de interrogadores con los oficiales navales a cargo. Para los interrogatorios se utilizaban dependencias tanto de la ACANAV como del cuartel Silva Palma. Se tomaba nota de las preguntas que respondían los prisioneros y el Suboficial Leiva las recogía y llevaba al Departamento de Análisis.

Finalmente, se agrega a esto la declaración extrajudicial prestada ante la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que rola a fojas 461 de estos autos, en la cual señala que ellos, como interrogadores, no recibían las órdenes directas del mando de la ACANAV, sino que del nexo entre los oficiales navales y ellos, que era el Suboficial Manuel Leiva, quien en definitiva les transmitía las ordenes de operaciones.

Su grupo operativo no interrogaba a los detenidos en el edificio de la ACANAV sino que en el cuartel Silva Palma, específicamente en unas casetas de madera que fueron instaladas en el patio donde funcionó la antigua Escuela de Ingeniería. En el interior de dichas casetas, había una mesa, dos

sillas y un foco con el cual alumbraban el rostro de los detenidos.

Al llegar un detenido, el cual venía encapuchado previamente, se procedía a leerle un cuestionario de preguntas tipo ya confeccionado, en realidad a todos se les leía el mismo cuestionario orientado a determinar los hechos relacionados a asuntos políticos, si existía una guerrilla en Colliguay, si manejaban armas, ubicación de explosivos, entre otros temas, luego ellos rellenaban los espacios en cada pregunta y efectuaban finalmente un resumen. Después ese cuestionario era entregado al Suboficial Leiva o retirado por algún funcionario naval. Acerca de sus técnicas de interrogatorio, señala que ellos únicamente formulaban preguntas a las personas y ellas respondían, en el caso que ellos no quisieran responder, se anotaba eso, pero nunca se los apremiaba física ni psicológicamente.

Cabe mencionar que durante su función eran supervisados por oficiales de la Armada, quienes también se desempeñaban al interior de la ACANAV, entre los que puede mencionar al Capitán de Fragata Hernán Soto-Aguilar y el Teniente **Ricardo Riesco**, quienes procedían a conversar con los detenidos para establecer situaciones, en algunas ocasiones participaban en los interrogatorios de los mismos.

**Décimo Noveno:** Que, en relación a la participación que le ha cabido al acusado Ricardo Riesco Cornejo en el ilícito que se ha dado por establecido, cabe tener en consideración que del análisis de las declaraciones que rolan a fojas 91 y 287, se desprenden importantes antecedentes que permiten concluir que existen en el presente caso presunciones judiciales bastantes y suficientes que convencen de la participación de este acusado en los hechos. En efecto, es importante anotar importantes diferencias entre ambas declaraciones respecto de su supuesta participación en estos ilícitos. Respecto de la foja 91, referida directamente a esta causa, indica datos que no son



creíbles y que no pueden considerarse como reales, al señalar enfáticamente que no existieron menores detenidos que habrían sido llevados al cuartel Silva Palma, en circunstancias que existen numerosos antecedentes que indican precisamente lo contrario e incluso esta causa, formó parte inicialmente de una querrela en que son precisamente menores de edad a la época en que fueron detenidos, quienes están accionando en contra de los responsables de las torturas de que fueron objeto. Además su declaración se contrapone con lo que indican otros co procesados, quienes se refieren positivamente a la participación de menores en las detenciones. Entonces lo declarado por Riesco en este punto, aparte de que no ha sido demostrado, no deja de ser una afirmación sin sentido y que no se condice con el resto de los antecedentes probatorios que obran en el proceso. En cuanto a que solamente en la Academia o cuartel Silva Palma permanecían infractores al toque de queda, también es una afirmación carente de veracidad, pues del mérito de todas las investigaciones que se siguen ante este Ministro, demuestran que las detenciones, interrogaciones y torturas inferidas, fueron por razones políticas, tal como ocurre en este caso, en que la víctima pertenecía, según sus dichos a las Juventudes Comunistas. Respecto al tema de los detenidos por toque de queda en esa época, es sabido y es de público conocimiento, que ellos eran enviados a los recintos policiales de Carabineros y de Investigaciones y que tanto la Academia de Guerra y el cuartel Silva Palma se reservaban para los detenidos políticos, puesto que en esos lugares operaba precisamente un grupo de “interrogadores” especialmente preparados para esas funciones, según consta además tanto de las certificaciones como del análisis de las hojas de vida de los procesados, a que se refieren los números 41 y 42 del considerando octavo de esta sentencia. También esta declaración se contradice respecto de lo que manifiestan los otros acusados en este proceso, en el sentido de que las interrogaciones efectuadas eran por razones políticas,

por lo que, en definitiva, lo que indica este acusado, aparece como una exculpación de su conducta ilícita no demostrada ni justificada. Por lo demás, este propio acusado reconoce que realizaba “labores operativas”, y que no es otra cosa que la detención de personas contrarias al gobierno militar y que eran llevadas al recinto en donde se las interrogaba y torturaba. Tampoco resulta creíble que no realizara labores como interrogador, pues no se explica por qué efectuaba tales labores en el buque escuela Esmeralda y no en la Academia de Guerra Naval y/o cuartel Silva Palma. En ese sentido es de interés la declaración policial que presta a fojas 287 con fecha 4 de Mayo de 2006, para los efectos de compararla con la que presta en este proceso a fojas 91 el 26 de Marzo del 2015. En la primera de ellas, junto con reconocer la realización de labores operativas, se refiere a que participaba en interrogaciones, incluso con golpes físicos. Sobre estas diferencias en ambas declaraciones, cabe indicar que la primera de ellas se presta en el marco de la investigación del paradero de Miguel Woodward, esto es, en un delito de secuestro calificado. Sabido es que en esa época, por lo menos en la jurisdicción de Valparaíso, no se investigaban denuncias por tortura o lesiones, esto es, cuando la víctima quedaba viva después de haber pasado por los lugares de detención en donde fueron torturadas. Es por ello que al igual que los otros acusados en esta causa, el tenor de las declaraciones son distintas, en el sentido de que evidentemente se explayaban más y en cierto modo se reconocía una actuación que en estos momentos implica una participación delictual susceptible de ser considerada un crimen de lesa humanidad y que motiva la instrucción de este proceso, al igual que muchos otros similares y que da cuenta el certificado a que se ha hecho referencia en el considerando octavo. Entonces, tomando en consideración los entornos distintos de la extensión de las investigaciones, resulta explicable, desde el punto de vista de la defensa, que en esta ocasión el grado de reconocimiento es

sensiblemente menor. Sin embargo, una consideración global y omnicomprendensiva del tema en discusión, permite concluir que estamos en presencia de lo que se llama “*un continuo fáctico*”, esto es, de una actuación generalizada y sistemática de un conjunto de funcionarios de la Armada de Chile, Infantes de Marina, encargados de interrogar a los que se consideraban como “enemigos” del régimen, para lo cual se utilizaron dependencias físicas concretas de esa institución armada, (entre otros, Academia de Guerra Naval, cuartel Silva Palma), de acuerdo a directrices e instrucciones, presumiblemente verbales, que necesariamente debieron emanar del Alto Mando, o que por lo menos contaban con su anuencia y que permitió la comisión de los delitos que aquí se investigan en períodos dilatados de tiempo. En ese contexto, es dable entender que un grupo de sujetos de la naturaleza señalada, contaba con un jefe, sindicado precisamente como “jefe de los interrogadores”, lo cual reconocen varios de los acusados en esta causa, según se advierte de sus indagatorias y además porque las hojas de vida de ellos son suscritas y anotadas de puño y letra por el acusado Riesco, quien se refiere básicamente a las labores que ellos efectuaban. También debe agregarse las indagatorias de los otros acusados, en el sentido de que Riesco entraba a mirar los interrogatorios en algunas ocasiones, lo que claramente es una forma de participación en el ilícito, pues con su presencia a lo menos está avalando la actuación de sus subalternos, por lo que en razón del mando que ostentaba, claramente resulta responsable en el ilícito en cuestión. Por último, no es posible pretender que al no existir una confesión judicial en forma, ello impida establecer cada uno de los sucesos que conforman las detenciones ilegales y la aplicación de tormentos o tortura, esto es, determinando cada episodio en particular y atribuyendo luego la responsabilidad en cada caso, pues la forma o manera como estos ilícitos se realizaron, tenían como propósito no dejar rastros de participación (de ahí la utilización de apodos en esos

recintos) y porque es propio de los organismos de seguridad o represivos de un régimen como el que existió, ocultar su accionar delictual o dificultar las futuras investigaciones. Que cabe tener presente que la situación anotada es aplicable a todos y cada uno de los condenados en esta causa, pues ninguno reconoce una participación concreta en tal sentido y resultaría ilusorio y contrario a la lógica, esperar una confesión para configurar el ilícito, de acuerdo a lo que se ha señalado recién, sobre todo cuando este último también se ha acreditado a través de presunciones judiciales. En razón de todo ello, conforme al mérito de todas las pruebas aportadas en autos, se puede inferir la participación de este procesado en el ilícito de autos, de acuerdo a las fechas y contenido que arroja su hoja de vida y su calidad de jefe de los interrogadores, conforme a los testimonios aportados y mérito de la investigación. En virtud de todas estas consideraciones, se concluye que al acusado Riesco le cabe plena responsabilidad como autor del delito de secuestro con grave daño.

**Vigésimo:** Que, con respecto a la participación que le ha cabido al acusado Juan Reyes Basaur en el ilícito que se ha dado por establecido, el tiempo que reconoce estuvo como interrogador en el cuartel Silva Palma, corresponde a la fecha de detención de la víctima de autos, lo que se refrenda con el análisis de la hoja de vida de este imputado, especialmente en cuanto a las anotaciones que se incorporan en ese instrumento, la mayoría suscritas por el acusado Riesco, en calidad de jefe de los interrogadores y superior jerárquico de todos los infantes de marina que realizaban tales funciones. En cuanto a las razones que habrían tenido los denunciantes para accionar en contra de la Armada, señala que ello se ha motivado por razones económicas. Sin embargo, ello no deja de ser una afirmación indemostrable y que refleja simplemente un argumento de éste, pero en ningún caso se ha acompañado alguna prueba tangible de tal situación. Es por ello que este aserto no puede

considerarse. Y algo similar ocurre cuando señala que no se interrogaban a menores de edad, por cuanto los antecedentes de este proceso y otros conocidos por este Ministro, demuestran precisamente lo contrario. Ahora bien, en cuanto a su declaración policial de fojas 263, que como ya se dijo se formuló en otro contexto, reconoce abiertamente que en los interrogatorios, aparte de efectuar “interrogatorios científicos”, esto es, de carácter psicológico, también su utilizaba un magneto que generaba electricidad, lo que implica entonces que también existían “interrogaciones físicas”, o dicho de otra forma, que se aplicaban torturas. Además, los interrogadores usaban apodos o chapas, como ser Telémaco, Cicerón, Sócrates, entre otros, lo que claramente tiene una intención de ocultamiento ante una actuación abiertamente ilegal y contraria a las normas básicas de una sociedad, como es el inferir torturas a las personas detenidas que estaban a su cargo. También en esta declaración reconoce abiertamente que las interrogaciones tenían por objeto obtener informaciones de los integrantes de partidos políticos, todos contrarios al régimen militar, entre los cuales estaba aquel al que pertenecía la denunciante, razones por las cuales, no obstante ser menor de edad a la fecha de ocurrencia de los hechos, resulta plausible que los organismos de seguridad y de represión de la época, la hayan interrogado de la manera como él relata. A lo anterior cabe agregar que este acusado, al igual que el referido en el considerando anterior y los demás que tienen responsabilidad en este proceso, formaban parte de un grupo de interrogadores instruidos especialmente para este objeto, todo lo cual consta de sus propias declaraciones y del mérito de algunas de las hojas de vida que se han acompañado, en el sentido de que registran su paso en campos de instrucción de EEUU y en donde se les instruyó precisamente en técnicas de interrogatorio y torturas. Que este antecedente también es aplicable al resto de los condenados que precisamente hicieron cursos de instrucción en EEUU. En

consecuencia, conforme a los antecedentes que se han indicado, existen presunciones judiciales bastantes que convencen al Tribunal de la participación de este acusado en el delito que se ha dado por establecido.

**Vigésimo Primero:** Que, en cuanto a la participación que le ha cabido al acusado Valentín Riquelme Villalobos en el ilícito que se ha dado por establecido, cabe señalar que éste reconoce haber interrogado a personas detenidas por sus ideas políticas y militancia en partidos contrarios al régimen de la época, tanto en la Academia de Guerra Naval como en el cuartel Silva Palma de Valparaíso, lugares que se considera como una sola unidad para los efectos que se dirá, en donde se aplicó torturas o tormentos a los detenidos que llegaron indistintamente a uno u otro lugar. En cuanto a que no existieron menores detenidos en esos recintos, ello no se condice con los antecedentes de este proceso y con el de aquellas causas en que precisamente menores de edad presentan acciones judiciales en contra de funcionarios de la Armada. Por otra lado, también este acusado formaba parte del grupo de interrogadores a que se ha hecho referencia en los considerandos anteriores, en el sentido de que un grupo de infantes de marina, entrenados la mayoría de ellos en cursos efectuados en EEUU, se les instruyó en materias relacionadas con la seguridad en general y aplicación de torturas, de lo cual resulta plausible que esas técnicas hayan sido utilizadas en contra de aquellos sujetos considerados como enemigos, en términos políticos. Por otro parte, este acusado además era instructor de los infantes de marina, esto es, se trataba de un funcionario que tenía una larga carrera en estas materias, por lo que resulta plausible que atendida esa experiencia, este acusado, al igual que sus co – reos, hayan sido nominados por la superioridad naval para efectuar las funciones que han configurado los ilícitos que se investigan, lo que recayó en el grupo de infantes de marina objeto de esta persecución penal. No resulta creíble entonces que este acusado no tenga

responsabilidad en la interrogación de menores, como ha afirmado. Por otro lado, en cuanto a la declaración policial que presta a fojas 391, se ratifica y explicita la labor de interrogador que se le achaca, la que en definitiva reconoce con aquellas particularidades que no han podido ser demostradas, esto es, de que no aplicó tortura en las interrogaciones que efectuó. Por último, debe también colacionarse, para los efectos de considerar las presunciones de participación que existen en este ilícito, que tratándose en concreto de una participación grupal, la responsabilidad de este acusado, al igual que sus co-reos, es imposible establecerla en base a una confesión concreta y precisa, pues todos ellos dan explicaciones o argumentaciones similares que apuntan a quedar impunes de los actos que han cometido, en este y otros procesos que investiga este Ministro, a lo que cabe añadir que al formar parte de un grupo de seguridad y represión, este imputado realizará todo lo posible para evitar que surja o aparezca una responsabilidad personal e institucional en los hechos que se investigan. También convence al Tribunal su participación, tomando en cuenta para ello el análisis de las hojas de vida a que se ha hecho referencia en considerandos anteriores de esta sentencia y los certificados que dan cuenta de numerosas anotaciones en que estos acusados han participado, precisamente, en labores que son objeto de esta investigación. En virtud entonces de todos estos antecedentes, se estima que en el proceso existen presunciones judiciales bastantes que convencen al Tribunal de la participación del acusado Riquelme en el presente ilícito.

**Vigésimo Segundo:** Que, en cuanto a la participación que le ha cabido al acusado Morera en el ilícito que se ha dado por establecido, cabe concluir que del análisis de todos los elementos probatorios que conforman este proceso, si bien el hecho punible se encuentra debidamente comprobado, como asimismo la responsabilidad de los co-reos que ya se han señalado, respecto de la participación criminal de este acusado,

no se ha podido establecer en forma fehaciente en los hechos de que se trata, no obstante haberse encontrado en el lugar de los hechos cuando ellos ocurrieron, dado que, por lo menos en el presente caso, no existe acreditada alguna actuación susceptible de encuadrarla en el delito de secuestro con grave daño. En concreto, los antecedentes arrojan que, en el presente caso, si bien la actuación del acusado Morera se puede enmarcar en las actividades ilícitas que un grupo de infantes de marina realizó en los cuartos ya mencionados, en contra de un grupo de personas que profesaban ideas contrarias al régimen imperante en la época, ellas decían relación con funciones de control y custodia distintas de aquellas relacionadas con el delito de secuestro con grave daño que se ha dado por establecida y todo ello conforme a los antecedentes probatorios que se especifican en el considerando octavo de esta sentencia. Que, en virtud de lo anterior, y al no encontrarse legalmente establecida la responsabilidad del acusado Guillermo Morera Hierro en estos hechos, se dictará sentencia absolutoria en su favor.

**Vigésimo Tercero:** Que, en cuanto a la participación que le ha cabido al acusado Alejo Esparza Martínez en el delito que se ha dado por establecido, si bien señala en su declaración indagatoria que no interrogó a menores en el cuartel Silva Palma ni tampoco tomó conocimiento de que algo así pudo haber ocurrido en ese lugar, lo cierto es que esa declaración no guarda relación con los antecedentes que obran en el proceso y que indican precisamente lo contrario, antecedentes descritos y desarrollados en considerandos anteriores de esta sentencia. En efecto, el acusado Esparza formaba parte de este grupo de interrogadores entrenados y dispuestos especialmente para cumplir con la tarea que les fue encomendada, cual era obtener información relevante de grupos contrarios al gobierno de facto existente en la época de los hechos, de lo cual existe abundante evidencia, tanto en este proceso como en aquellos referidos en el número 41 del considerando octavo de esta sentencia, esto es,



las hojas de vida de cada uno de ellos, situación que les permitía interrogar a todas las personas que llegaban detenidas al cuartel Silva Palma, de acuerdo a las instrucciones internas recibidas y que impiden considerar las exculpaciones que él formula. Aún más, no se advierte por qué motivo no pudieron interrogar a menores de edad que conforme al pensamiento del instituto armado del cual formaban parte, podían considerarse como subversivos o de ideas proclives al régimen fenecido, todo lo cual se manifiesta claramente en las hojas de vida de los acusados, en los cuales el co-reo Riesco se refiere a sus funciones de interrogadores, coinciden con el tiempo en que la víctima estaba detenida y que lo posicionan precisamente en el lugar en que se infirieron las torturas. Por otro lado, las respuestas proporcionadas por este acusado se inscriben en la estrategia de todos los imputados en este proceso, cual es no reconocer el delito que se les imputa. Sin embargo, atendido el cúmulo de antecedentes inculpatorios que existen en el proceso y que aparecen expuestos en forma pormenorizada y desarrolladas en el considerando octavo de esta sentencia, se concluye que al acusado Esparza le cabe responsabilidad en el delito que se ha dado por establecido, por existir presunciones judiciales bastantes que convencen de esa participación.

**Vigésimo Cuarto:** Que, en cuanto a la participación que le ha cabido al acusado Eduardo Núñez Contreras en los ilícitos que se han investigado, conforme a lo que declara en su indagatoria, él no realizó labores de interrogador, sino que fue operativo (COC). Sin embargo, esta declaración es desmentida flagrantemente con su hoja de vida, pues Ricardo Riesco, su calificador directo y también acusado en esta causa, entre noviembre de 1973 y diciembre de 1974, esto es, dentro del período en que la víctima estuvo detenida, le consigna las mismas y exactas anotaciones que a los otros interrogadores y también acusados en esta causa, con iguales palabras y referencias a cada uno de ellos y como se fuera una anotación

“tipo”, todo ello relacionado con la función de interrogadores que todos ellos cumplían, no haciéndose mención alguna que realizara alguna labor operativa como este acusado indica, por lo menos en el tiempo suspecto. Respecto a ello, en la hoja de vida, recién en Octubre de 1975, existe una anotación como operativo realizada por Carlos González Lira, el siguiente funcionario calificador de este grupo. Además, en relación con las funciones sospechosas, otro interrogador y acusado, Juan Reyes Basaur, señala a fojas 93 que “otros de los Infantes de Marina que interrogaban en el cuartel Silva Palma, estaban los Cabos Carlos Ponce Álvarez, Eugenio Pinto Salas, Tuba (Eduardo) Núñez Contreras, Miguel Concha Rivera y Bertalino Castillo Soto”. Que, de la manera antedicha, queda claro que al pretender ocultar sus verdaderas funciones en el lugar en donde se infirieron torturas, precisamente en la época en que la víctima estuvo detenida, demuestra inequívocamente su participación en el ilícito correspondiente, dado que su exculpación no pudo ser demostrada y, además, de que formaba parte del grupo de Infantes de Marina entrenados especialmente para ejecutar las labores de interrogadores. Existiendo entonces presunciones judiciales bastantes de su participación en este ilícito, le cabe responsabilidad en los mismos.

**Vigésimo Quinto:** Que, en cuanto a la participación que le ha cabido al acusado Héctor Santibáñez Obreque en el ilícito que se ha dado por establecido, este imputado reconoce que se desempeñó como interrogador, precisamente en la época en que la víctima de autos estuvo detenida. Además, conforme a la declaración que presta a fojas 494, indica antecedentes que solamente su paso en esa calidad en tales recintos de detención lo puede proporcionar una persona que realmente estuvo en esos lugares. Ahora bien, en cuanto a que no habría inferido castigo a las personas interrogadas, ello no se encuentra corroborado en el proceso y resulta difícil de creer, atendido los antecedentes y lo expuesto en relación con los otros acusados de

este proceso, en el sentido de que los todos ellos, con las excepción del absuelto, tenían como función una labor especializada, en la que habían recibido instrucción precisamente para obtener confesiones a través de cualquier medio, entre los cuales estaba la aplicación de la tortura. Respecto de este acusado existen las mismas anotaciones en su hoja de vida redactadas por Ricardo Riesco Cornejo, en que lo posiciona en el cuartel Silva Palma y efectuando interrogaciones. El análisis de estas hojas de vida, dan cuenta de una labor que básicamente consistía en obtener información de aquellas personas consideradas como “enemigas”, desde un punto de vista político, por lo que en esa lógica, no resulta plausible que las interrogaciones se hayan efectuado de la forma como los acusados han señalado, pues las propias declaraciones de algunos de ellos indican precisamente lo contrario. En base a estos antecedentes, se estima que existen antecedentes suficientes para imputarle responsabilidad en el delito de secuestro con grave daño al acusado Santibáñez, respecto de la víctima de autos.

**Vigésimo Sexto:** Que, en cuanto a la participación que le ha cabido al acusado Jaime Lazo Pérez en el ilícito que se ha dado por establecido, en este proceso existen declaraciones suficientes que permiten posicionarlo en el lugar de los hechos y realizando las labores que han dado lugar al ilícito que se investiga. Por otra parte, en cuanto a que interrogó a personas por problemas “vecinales”, ello no resiste ningún análisis, pues existe consenso, entre los mismos acusados de esta causa, que las labores por lo que se les consulta, era la de interrogadores en un contexto político. Además, las circunstancias que implicaron la función referida se encuentra latamente reconocida, en el sentido de que no realizaba las interrogaciones más duras y fuertes, lo cual implica, por una parte a los co-reos de esa actividad ilícita, sino que también lo posiciona a él mismo en las funciones de interrogador. También es poco creíble que haya

interrogado solo, cuando en sus otros testimonios, se refiere a una labor conjunta y mencionando específicamente a personas que también están acusadas en este proceso. Es así entonces que el acusado Lazo, formando parte de este grupo organizado de interrogadores y no obstante que ha pretendido deslindar o bien negar derechamente su responsabilidad penal, se desprende netamente ella, en circunstancias que todos los antecedentes apuntan que le cupo tal participación. Por último, en la hoja de vida de este acusado se mencionan las mismas indicaciones que a los otros imputados respecto de la labor que realizaban y que la persona que los calificaba era Ricardo Riesco Cornejo, también acusado. En virtud de ello, puede concluirse que al acusado Lazo le cabe plena responsabilidad como autor del delito acreditado, no siendo dable considerar un argumento en su favor, y lo mismo respecto de los otros partícipes, de la falta de precisión de la o las personas que en cada oportunidad realizaron las torturas, dado que estamos ante un grupo múltiple de autores, las que realizaron en grupos más reducidos o más extendidos, las torturas en los interrogatorios, pues ya se ha dicho que una simple negativa no es suficiente para el efecto que ellos pretenden, pues ello implicaría que este tipo de delitos siempre quedarían impunes en la medida que sólo pueda considerarse una confesión, pues para ello existen las presunciones judiciales que pueden convencer de una participación a través de otros medios de prueba, como ocurre en este caso.

**E.- En cuanto a la contestación de la acusación:**

**Vigésimo Séptimo:** Que contestando la acusación la defensa de los acusados Riesco, Reyes, Riquelme, Morera, Esparza, Núñez, Santibáñez y Lazo, en el primer otrosí del escrito de fojas 767, hace presente primeramente que debería dictarse sentencia absolutoria a favor de sus representados, por cuanto la acción penal se encontraría cubierta por la amnistía y la prescripción de la acción penal, para lo cual da por

reproducidos los argumentos esgrimidos respecto a las excepciones de previo y especial pronunciamiento de amnistía y prescripción, las que presenta también como defensas de fondo, y que se encuentran contenidas en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia.

Como una cuestión previa, la defensa alega el incumplimiento de la ley en la dictación y contenido de la acusación, atendido a que conforme lo dispone el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal, la acusación debe contener requisitos mínimos, entre ellos la determinación de los hechos que constituyen el delito (es decir, los hechos que constituyen cada uno de los delitos por los que se acusará) y asimismo, la participación que le ha cabido en él, o en cada uno de ellos al procesado o los procesados en el sumario, con expresión de los medios de prueba que obran en el sumario para acreditar unos y otras. Al respecto señala que ninguna de las exigencias se cumple en lo más mínimo, ya que no existiría absolutamente ninguna prueba ni siquiera alguna declaración imparcial que involucre a sus representados con los hechos por los que se les acusa, tratándose de un incumplimiento que desde luego constituye una causal de nulidad de derecho público y, atendida la obligación del Tribunal de velar por la validez de los actos del mismo es que solicita que se deje sin efecto la acusación y en su reemplazo se dicte una nueva que sí cumpla con los requisitos del artículo antes mencionado.

En cuanto a absolucón que solicita, alega la falta de participación de sus representados en los delitos que se les imputan, indicando que aquellos hechos habrían ocurrido en Febrero de 1974 y solo se sustentan en las declaraciones del propio querellante y en argumentos que no son concebibles y que ofenden el más elemental sentido común, principalmente en sostener que miembros de la Armada de Chile proceden a la captura de un niño de 14 años, dejándole un “recado” de que si no comparece al lugar que le indican, sus amigos no serán

liberados y aún peor, no se hace cargo de lo ridículo que sería que cualquier adulto responsable de ese niño, le hubiere dado el recado y le hubiere permitido ir. Dice que la relación de los hechos es ridícula e infantil, mentiras evidentes que han pasado inadvertidas o que han sido voluntariamente ignoradas por el tribunal.

Agrega que no existe en la acusación alguna imputación clara y precisa que permita a sus representados defenderse, puesto que si desconoce cuáles son los hechos o conductas que se le reprochan a cada uno de ellos, de donde nace la distinción entre los delitos imputados, secuestro con grave daño y la aplicación de tormentos, ya que supuestamente es esa aplicación lo que precisamente constituye el grave daño, en concreto que comparten el mismo hecho típico y por lo tanto su coexistencia vulnera el principio non bis in ídem y el derecho a defensa.

En cuanto a la acusación por el delito de secuestro con grave daño, alega que desde luego ninguno de sus representados participó en los hechos, pero lamentablemente al no ser imputada alguna participación específica a alguno de ellos, la defensa estaría impedida de hacerse cargo de vinculaciones que solo están en la mente de este Ministro en el sentido de no haberse exteriorizado en la acusación conforme lo ordena el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal, transcribiendo un extracto de la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol CS 39.732-2017, en relación a la causa Rol 2182-1998, “Operación Colombo”, episodio “Washington Cid Urrutia”.

Como atenuantes de responsabilidad criminal, alega la establecida en el art. 103 del Código Penal, esto es, la media prescripción; el cumplimiento de órdenes, de acuerdo a los indicado en el art. 211 del Código de Justicia Militar, la que se invoca como muy calificada; la atenuante establecida en el art. 214 del Código de Justicia Militar, en el sentido de que la

supuesta orden tendría por objeto la comisión de un delito, aplicándose en ese caso lo dispuesto en el artículo 335 de ese cuerpo de leyes; la eximente incompleta del artículo 11 N° 1 del Código Penal, en relación con el art. 10 N° 10 del mismo cuerpo legal; la irreprochable conducta anterior y la colaboración eficaz, establecidas en los N° 6 y 9 del art. 11 del Código Penal, y respecto de la segunda, por cuanto sus representados han concurrido absolutamente a todas las citaciones y diligencias que este Ministro ha decretado, han prestado declaración contestando todas y cada una de las preguntas que se le han formulado y exhortados a decir la verdad, lo han hecho con todo lo que saben al respecto, sin ocultar antecedentes ni información alguna.

Respecto de la penalidad aplicable, señala que existe imposibilidad de determinar si se les acusa por detención ilegal o secuestro, delitos que tienen desde luego una penalidad distinta y que eventualmente pueda dictarse condena en contra de sus representados por alguno de ellos y no por ambos, y considerando que ninguna de las figuras agravadas del delito puede subsumirse en su conducta, no queda sino entender que se trata de sus figuras simples, que tienen una penalidad de presidio menor en cualquiera de sus grados.

Atendida la concurrencia de las circunstancias atenuantes, e inexistencia de circunstancias agravantes de autos, debe hacerse remisión a lo contemplado en el artículo 68 inciso 3° del Código Penal, en que el Tribunal podrá rebajar la pena hasta en 3 grados.

En el cuarto otrosí de su escrito, solicite se le aplique a sus representados, alguno de los beneficios establecidos en la Ley 18.216.

**Vigésimo Octavo:** Que con respecto a la amnistía y prescripción que se solicita se aplique en el presente caso por parte de la defensa de los acusados a los ya mencionados, debe señalarse que esa parte se remite a los argumentos planteados

en estos mismos rubros, a propósito de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, y que no se desarrollan en el presente caso por razones de economía procesal. Ahora bien, como dichas excepciones de previo y especial pronunciamiento de amnistía y prescripción ya fueron rechazadas, debe estarse a lo que el Tribunal manifestó respecto de esa desestimación. Que, sin perjuicio de lo indicado y a mayor abundamiento, el rechazo a la posibilidad de que este proceso termine a través de la amnistía o por prescripción, se basa en que estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad, esto es, de aquellos de los más graves que se cometen en un contexto de irrespeto de los valores fundamentales del ser humano, a través de hechos realizados por agentes del Estado con total impunidad, dirigidos hacia una parte de la población civil contrarios al régimen imperante, a través de una persecución sistemática y brutal que se funda en razones ideológicas, por lo que, en ese escenario, resulta incongruente con un sistema de derecho actual, democrático y tolerante, que se puedan aplicar las normas y los efectos de la amnistía y de la prescripción, pues ello imposibilitaría el derecho a la investigación que tiene cada ciudadano, no tendría lugar la responsabilidad que tiene el Estado por los actos ilícitos cometidos por sus agentes, en este caso, funcionarios de la Armada de Chile, y que como consecuencia de todo ello, poder sancionar, conforme a la legalidad vigente, este tipo de crímenes, lo que sólo podrá tener lugar cuando termina el régimen autoritario que prohió dichos crímenes, y sólo cuando los tribunales ordinarios de justicia pudieran recuperar sus fueros y facultades para avocarse a la investigación y sanción de ellos. De manera tal que para fundar este rechazo a la amnistía y prescripción, aparte de las consideraciones generales expuestas, debe recurrirse a la legislación internacional que forma parte del Derecho Penal Humanitario y que recoge la normativa propia del *ius cogens* sobre esta materia, y que se encarga precisamente de llenar los



vacíos y lagunas que voluntaria o involuntariamente posee la legislación interna de muchos países, lo que sanciona con gran fuerza y significación a partir de los Convenios de Ginebra, en especial su artículo 3° común en que se aluden a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y en donde claramente se excluye la prescripción y la amnistía como causales válidas de extinción de la responsabilidad penal. Por otra parte, no es posible aplicar la normativa interna de la prescripción porque durante la vigencia del régimen autocrático en nuestro país, se hizo todo lo posible para que tales hechos no se investigaran. En concreto, en cuanto a la amnistía, no es posible considerar un texto como el vigente que la consagra, cuando ella es prohibida especialmente por esta legislación internacional y cuando además se contrapone a un evidente sentimiento de justicia y de reparación. Ahora bien, en cuanto a la prescripción, el paso del tiempo, como fundamento de esta institución, está concebida para consolidar situaciones de hecho o dar seguridad a las relaciones de derecho acaecidas en épocas normales y no en estados de guerra, como se proclamó en los primeros años del régimen militar. La concepción de los delitos de lesa humanidad aparece para oponerse decididamente a la comisión de hechos graves que afectan la conciencia jurídica universal de todos los pueblos.

**Vigésimo Noveno:** Que respecto de la argumentación de la defensa de los acusados, en orden a que los delitos de lesa humanidad recién fueron tipificados en la Ley 20.537, por lo que no tendrían aplicación los Convenios de Ginebra, no corresponde tal argumentación, y además, esa es una materia que ya ha sido zanjada por la Excma. Corte Suprema en cuanto a la aplicación de dicha normativa internacional y otros instrumentos que existen sobre este punto, los que priman en este punto sobre la legislación interna, y que se ha plasmado en varios de sus fallos, como los que se indican a continuación: “Es manifiesto que, dada la naturaleza de los hechos pesquisados,

que representan un ultraje a la dignidad humana y una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en diversos instrumentos internacionales, constituyen un delito de lesa humanidad. El ilícito ocurrió en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado, constituyendo la víctima en este caso y muchas otras un instrumento dentro de una política a escala general de exclusión, hostigamiento, persecución o exterminio de un grupo de numerosos compatriotas a quienes en la época inmediata al once de septiembre de mil novecientos setenta y tres se le sindicó de pertenecer ideológicamente al régimen político depuesto o que por cualquier circunstancia fuera considerado sospechoso de oponerse o entorpecer la realización de la construcción social y política ideada por los detentadores del poder, garantizándoles la impunidad a los ejecutores de dicho programa mediante la no interferencia en sus métodos, tanto con el ocultamiento de la realidad ante la solicitud de los tribunales ordinarios de justicia de informes atinentes, como por la utilización del poder estatal para persuadir a la opinión pública local y extranjera que las denuncias formuladas al efecto eran falsas y correspondían a una campaña tendiente a desprestigiar al régimen militar autoritario. Así, personas que se sirven de medios o instrumentos estatales para perpetrar tan graves crímenes contra los derechos y libertades fundamentales del individuo, se envuelven en un manto de impunidad tejido con recursos propios del Estado” (...) “Los principios de acuerdo a los cuales se consagran la imposibilidad de amnistiarlos, de establecer circunstancias excluyentes de responsabilidad o de declarar su prescripción, institutos que pretenden impedir la investigación y sanción de los responsables, determinan que los convenios, pactos y tratados en que se reconocen los derechos humanos y las garantías a nivel de tribunales nacionales, gozan

de primacía. De este postulado se sigue que de acuerdo a una interpretación progresiva y finalista de la Carta Fundamental, prevalecen sobre el orden jurídico interno, puesto que se entiende que la prefieren, perfeccionan y complementan, siendo, por tanto, una normativa posible de invocar por todos los individuos, atendido el compromiso moral y jurídico de Estado ante la comunidad internacional de respetar, promover y garantizar los derechos fundamentales del individuo. Es por ello que en este tipo de transgresiones no es posible invocar la Ley de Amnistía y la prescripción de la acción penal, porque lo prohíbe el derecho internacional de los derechos humanos” (...) “Que de este modo no es posible sostener, como pretende el recurso, que ultrajes a la dignidad de las personas como los que aquí se han perseguido y sancionado, sólo hayan sido tipificado como delitos en Chile con ocasión de la dictación de la Ley N° 20.357. Conforme a esa normativa, nuestro país ha recogido de modo expreso en su legislación interna conductas que eran punibles desde los inicios de nuestra legislación penal, por contravenir el ordenamiento internacional.”(Corte Suprema. 9 de noviembre de 2015. Rol 7308-15). Que de los fallos mencionados, es posible concluir que no corresponde considerar la mencionada ley, puesto que, como se ha dicho, al momento en que se cometen los hechos objeto de la presente investigación, se encontraban vigentes los Convenios de Ginebra que regulan la materia en cuestión. Que, en consecuencia, por las razones ya indicadas, no corresponde considerar las argumentaciones de la defensa en torno a la amnistía y prescripción para solicitar se dicte sentencia absolutoria en contra de sus representados, en esta oportunidad como cuestiones de fondo.

**Trigésimo:** Que, a continuación, la defensa sostiene que se ha incumplido la ley en la dictación del contenido de la acusación, pues conforme al artículo 424 del Código de Procedimiento Penal, no se indicarían los hechos que

constituyen el delito. Que, sin embargo, no obstante que no se entiende con claridad las argumentaciones de la defensa en este punto, de la lectura de la acusación se advierte claramente que cumple con los requisitos establecidos en dicha disposición, además de que resulta extemporáneo que se haga cuestión de una actuación que básicamente es similar al contenido del auto de procesamiento que oportunamente se dictó, no existiendo en esa oportunidad objeción alguna respecto de los hechos contenidos en dicho auto de procesamiento. Que, en todo caso, debe puntualizarse que las deficiencias anotadas por la defensa no existen, pues el material aportado no impidió que se haya contestado la acusación en sus aspectos sustantivos, esto es, no ha tenido dudas de cuáles son los hechos que la conforman. Que, por lo demás, en cuanto a que resultaría ridícula e infantil la versión del querellante en este caso, por tratarse de un menor de 14 años y no entender cómo sus padres o personas a su cargo hayan permitido concurrir al lugar en donde fue torturado, ello implica simplemente desconocer la realidad fáctica de ese período histórico, ampliamente reconocido, en que los tribunales ordinarios de justicia se encontraban cercenados en cuanto a sus facultades y la población civil no podía oponerse a los requerimientos de la autoridad. Que no es posible analizar la situación a que se refieren los hechos investigados, con los parámetros actuales, dado que las condiciones son sensiblemente diferentes. En esa época era común que las detenciones no repararan en la edad de las víctimas, tal como lo demuestran numerosos antecedentes en expedientes conocidos por este Ministro y en otras jurisdicciones, por lo que las argumentaciones vertidas en este punto por la defensa no dejan de ser una maniobra de desacreditación de la posible plausibilidad de una denuncia y que en el presente caso se ha visto reforzado con los medios de prueba a que se hace referencia en el considerando octavo de esta sentencia. Por otro lado, los medios de prueba ya analizados son claros, en

concepto del sentenciador, a tener por establecidos los hechos, independiente de las objeciones que la defensa manifiesta. En virtud de lo anterior, serán desestimadas las pretensiones de la defensa en este punto.

**Trigésimo primero:** Que en cuanto a la falta de participación de sus representados que también se alega a continuación en la contestación de la acusación, el Tribunal se remite a lo ya expuesto en el considerando octavo de esta sentencia, en cuanto allí se indican los antecedentes probatorios concretos que sirven para configurar los hechos y la responsabilidad de cada uno de los acusados, de acuerdo con las declaraciones indagatorias que rolan desde el considerando décimo primero al décimo octavo, (con excepción del acusado que fue absuelto) y a las argumentaciones del Tribunal en cuanto a establecer la participación de ellos, lo que se desarrolla desde los considerando décimo noveno a vigésimo sexto. La conclusión de todo lo anterior es que a través de confesiones parciales de algunos aspectos relevantes de la investigación y de presunciones judiciales, es posible arribar a la convicción de que a los acusados ya indicados, les cabe plena responsabilidad en la comisión del delito de secuestro con grave daño subsistente en esta sentencia. En virtud de lo expuesto precedentemente, no se accederá a la petición de la defensa en orden a absolver a sus representados, en lo que respecta a su supuesta falta de participación

**F.- En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad:**

**Trigésimo Segundo:** Que en lo principal del escrito de fojas 706, la parte querellante, junto con adherirse a la acusación fiscal, señala a fojas 709 que el actuar ilícito de los acusados se encuentra agravado con las siguientes circunstancias legales, a saber, obrar con alevosía, en los términos del artículo 12 N° 1 del Código Penal; obrar con premeditación conocida, de acuerdo a lo indicado en el N° 5 del

mismo artículo y código; y ejecutar el delito con auxilio de gente armada.

**Trigésimo Tercero:** Que en cuanto a las agravantes de la alevosía y premeditación conocida, de acuerdo a la naturaleza del crimen que se ha dado por establecido, esto es, secuestro con grave daño, resulta connatural que tales circunstancias se encuentren implícitas en las acciones llevadas a cabo por los hechores para cometer el referido ilícito, pues tratándose, como ya se ha dicho, de un grupo armado especialmente entrenado para interrogar y torturar, el actuar sobre seguro y persistente en el tiempo, son propias y características en el secuestro en general, por lo que el desvalor de la conducta de que se trata, integra la mayor pena que posee la figura concreta del secuestro con grave daño. En cuanto a ejecutar el delito con auxilio de gente armada, entendiéndose que se trata de la agravante establecida en el N° 11 del art. 12 del Código Penal, tal circunstancia es inherente al delito investigado, dado que el portar armas es propio de las instituciones armadas, de los cuales los acusados formaban parte, configurándose de esa forma la situación que contempla el inciso segundo del artículo 63 del Código Penal. Que, en consecuencia, en base a estas consideraciones, no se acogerán las agravantes que hace valer la parte querellante.

**Trigésimo Cuarto:** Que, en relación a las atenuantes que invoca la defensa en su escrito de fojas 767 y siguientes, respecto a la media prescripción, prescripción gradual o incompleta que alega la defensa de los acusados como atenuante, basado en lo que dispone el artículo 103 del Código Penal, sin perjuicio de considerarse que ella constituye una forma de calcular la pena atendida las circunstancias de tiempo que la disposición menciona, ella escapa de la normativa general que contempla el artículo 11 del mismo código, por lo que, en estricto rigor, no estamos propiamente ante una circunstancia atenuante de aquellas llamadas genéricas, sino que es

simplemente una forma de conmensurar la pena, atendida las circunstancias de tiempo que la propia norma señala. Sin embargo, en uno y otro caso, esta situación debe igualmente ser rechazada, toda vez que, tal como se dijo al momento de refutar la contestación del acusado respecto a la prescripción de la acción penal, lo cierto es que ambos institutos tienen como fundamento el paso del tiempo, de forma tal que si ya se ha señalado que no procede la prescripción de la acción penal por tratarse el delito que se sanciona como crimen de lesa humanidad, por las razones que ya se formularon, tampoco procede considerarla tomando en cuenta la mitad del tiempo transcurrido conforme a la norma del artículo 103 del Código Penal. Por último, tampoco resulta adecuado considerar el efecto de una disposición que está en oposición al rechazo de la prescripción general, pues subsisten las mismas razones, en uno u otro caso, para su rechazo. En virtud de estas consideraciones, esta petición de que se considere el artículo 103 del Código Penal para la aplicación de las penas correspondientes, no será acogida.

**Trigésimo Quinto:** Que, respecto al cumplimiento de órdenes a que se refiere el artículo 211 del Código de Justicia Militar, la que se alega como muy calificada, ello se desprendería, de acuerdo a lo que señala la defensa, por cuanto, si se estimara que sus representados participaron en los hechos que se le imputan, la orden habría emanado necesariamente de un superior jerárquico, puesto que los hechos habrían ocurrido en cuarteles navales, por lo que debió existir un cumplimiento de alguna orden, ya que esos recintos militares no están a disposición arbitraria de tenientes y sub oficiales. Que, sin embargo, esta argumentación resulta inconsecuente e insubstancial con el mérito del proceso, desde el momento en que los acusados no reconocen haber cometido los hechos y, tal como se ha dicho, básicamente su responsabilidad está establecida en base a presunciones judiciales. En ese escenario

no resulta procedente que se exprese que hipotéticamente pudieron haber recibido la orden de algún superior, dado que en sus declaraciones han manifestado haber actuado sin haber cometido los delitos que se les imputan. Por otro lado, para que proceda esta atenuante de responsabilidad, es necesario que se señale en forma pormenorizada de quién se recibió la específica orden de cometer el delito, lo que claramente no existe en el proceso, por lo que es imposible aplicar la norma *in comento*, al desconocerse un dato esencial que daría sustento a lo alegado. Es por estas razones que esta atenuante no podrá ser considerada y tampoco como muy calificada, pues no existe algún elemento que la haga procedente en esos términos.

**Trigésimo Sexto:** Que, respecto de la atenuante del art. 214 del Código de Justicia Militar, en relación con el art. 335 del mismo código, por las mismos argumentos expuestos respecto de la atenuante anterior, ella deberá ser desestimada, y toda vez que no existe antecedente alguno de que los acusados hayan recibido orden alguna de cometer el delito por el cual son responsables, y si la recibieron realmente, ellos no han confesado esa situación, por lo que es imposible considerar esa hipótesis.

**Trigésimo Séptimo:** Que también se invoca la eximente incompleta del artículo 11 N° 1 del Código Penal, en relación con el art. 10 N° 10 del mismo cuerpo de leyes, y que se funda en lo ya expuesto precedentemente por la defensa, a propósito del cumplimiento de órdenes. Sin embargo, esta atenuante no puede prosperar toda vez que la eximente correspondiente no es aquella que conste de requisitos o de que pueda ser dividida intelectualmente para su procedencia, pues en el caso concreto se pueden recibir o no recibir órdenes, no existiendo situaciones intermedias al respecto. Por último, también corresponde el rechazo desde el momento en que la eximente ha sido desestimada en toda su extensión, no pudiendo por ende ser



considerada como atenuante basada en una eximente incompleta.

**Trigésimo Octavo:** Que, en cuanto a la irreprochable conducta anterior que se alega en favor de los acusados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 número 6 del Código Penal, ella se configura respecto de todos ellos, pues a la fecha de comisión de los hechos a que refiere este proceso, y de acuerdo a los respectivos extractos de filiación que se han acompañado, ninguno de ellos contaba con anotaciones penales pretéritas.

**Trigésimo Noveno:** Que respecto a la última atenuante que invoca la defensa de los acusados, consistente en la “colaboración sustancial”, establecida en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, ella no se configura en el presente caso, pues el hecho de concurrir a todas las diligencias y citaciones del Tribunal, no implica la exigencia perentoria que establece la referida norma, en orden a aclarar substancialmente los hechos, situación que claramente, de la lectura de las declaraciones indagatorias de los acusados, no ocurre en la especie, toda vez que ellos niegan haber cometido las torturas que se les achaca y además, por el contrario, ponen en duda la legitimidad de la denuncia. Por último, no debe perderse de vista que la responsabilidad de los acusados ha sido establecida en base a presunciones judiciales, sin perjuicio de las confesiones parciales que en algún momento formularon y que en todo caso ha servido al Tribunal, junto con el resto de los antecedentes probatorios, a formarse convicción en torno a la responsabilidad efectiva de cada uno de los acusados por este delito.

**G.- En cuanto a la penalidad aplicable:**

**Cuadragésimo:** Que, según se ha expuesto, los acusados son responsable del delito de secuestro con grave daño, ilícito preceptuado en el artículo 141 inciso 3° del Código Penal, vigente a la fecha de comisión de los hechos, el que contempla una penalidad de presidio mayor en cualquiera de sus grados.

Teniendo presente en seguida que a los sentenciados les favorece la atenuante de sus irreprochables conductas anteriores, según ya se ha manifestado, conforme a la norma del inciso 2° del artículo 68 de ese mismo cuerpo de leyes, no se aplicará en el presente caso el grado máximo de la pena; y haciendo aplicación, por último, de la norma establecida en el artículo 69 del Código punitivo, en el sentido de que también debe considerar la extensión del mal producido por el delito, lo que se encuentra establecido sobradamente con los antecedentes referidos a la situación psicológica actual de la víctima, y por tratarse en la especie de un crimen de lesa humanidad que ha afectado a ella de la manera ya dicha, la penalidad se aplicará en la parte media del grado mínimo inferior.

**H.- En cuanto a los beneficios de la Ley 18.216:**

**Cuadragésimo Primero:** Que, atendida la extensión de la pena que se impondrá a los acusados en la parte resolutive de la sentencia, no se les favorecerá con ninguno de los beneficios establecidos en la Ley 18.216, modificada por la Ley 20.603, por lo que deberán cumplir efectivamente con la pena privativa de libertad que se impondrá en definitiva.

**I.- En cuanto a la acción civil:**

**Cuadragésimo Segundo:** Que, en el primer otrosí del escrito de fojas 706, el abogado Hernán Fernández Rojas, en representación del querellante Oscar Ibaceta Jorquera, interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile. Señala en qué consistieron los hechos que fundan su libelo y que han sido expuestos latamente en la parte criminal del fallo, para luego aludir al daño provocado al demandante civil y al monto de la indemnización que se demanda. Refiere a que el Estado de Chile, a través de la acción de sus agentes, ha provocado un daño ostensible y grave a su representado, a quien le asiste el derecho de demandar al Estado la reparación del incommensurable daño que fue

ocasionado, por acciones intrínsecamente criminales y antijurídicas.

Señala, además, que según la jurisprudencia citada, el daño moral se hace presente por sí mismo en atención a los hechos, es decir, salta a la vista de lo evidente que es, por lo que son fáciles de entender en su plenitud, y solo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud y del monto de la reparación.

Se refiere al derecho, mencionando la competencia del Tribunal en materia civil. Menciona los fallos en los que la Corte Suprema ha establecido la responsabilidad de los órganos del estado en esta materia y por último se refiere al daño provocado a la víctima y al monto de la indemnización que se demanda. En virtud de lo señalado, demanda por concepto de daño moral la suma de \$800.000.000.- (ochocientos millones de pesos), suma que deberá ser pagada de acuerdo al IPC desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio, o, en su defecto, el monto indemnizatorio, reajustes e intereses que estime US. Iltma., de acuerdo con la apreciación y valoración del fallo.

**Cuadragésimo Tercero:** Que contestando la demanda civil el Fisco de Chile en lo principal del escrito de fojas 724, pide su rechazo alegando la excepción de reparación satisfactiva y la improcedencia de la acción alegada por el actor, por haber sido ya indemnizado. En subsidio, invoca la excepción de prescripción extintiva, mencionando al efecto jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de su posición. Respecto al daño e indemnización reclamados, indica que el monto referido resulta absolutamente excesivo, debiendo en todo caso considerarse los pagos que el Estado ya efectuó. Menciona la improcedencia del cobro de reajustes e intereses en la forma que se ha solicitado.

**Cuadragésimo Cuarto:** Que la prueba testimonial rendida por la parte demandante civil ha consistido en las declaraciones que han prestado Elena del Carmen Quiligrán Ugalde, Patricio

Marcelino Salazar Abarzúa, Claudia Fernanda Jofré Vidal, y Claudia Andrea Henríquez Gamonal a fojas 835, 837, 839 y 852, respectivamente. La primera señala que a la víctima lo torturaron en la Academia de guerra Naval, donde le pusieron corriente en los testículos. Sabe que él no pudo reconocer a ninguno de sus torturadores porque se encontraba encapuchado. Cree que él estaba en las Juventudes Comunistas y estaba en la población de los trabajadores de la compañía de Gas, por lo que era obvio que iban a barrer con todas esas personas. Agrega que su marido no tiene concentración, tampoco retención de memoria, si se le toca el tema, es cosa de lágrimas. En lo material, nunca pudo trabajar bien, le costó mucho continuar sus estudios, en lo laboral no pudo surgir, porque le cuesta justamente aprender, no es capaz de aprender los manuales. Las veces que han ido al psicólogo es difícil que él se abra, que cuente lo que le ocurrió. El segundo señala que sabe que la víctima fue detenida y maltratada. Hay cosas que no ha contado. Sabe que fue detenido entre enero y febrero de 1974, llevado a una repartición militar, en donde estuvo aproximadamente una semana. Lo tomaron preso por pertenecer a las Juventudes Comunistas. La tercera testigo, psicóloga, señala que la víctima consultó por tener síntomas de depresión severa asociado a eventos de su niñez /adolescencia, a los 13/14 años- La experiencia vivida por su detención la asignó como traumática, pues estaba en la búsqueda de su identidad, lo evidencia una cronicidad del trauma. Le contó que fue sometido a 4 interrogatorios y que habría sido violentado. En el tratamiento fue derivado a un médico general para que comenzara una terapia farmacológica para controlar su irritabilidad y por los aspectos ansiosos-depresivos que tiene, como descontrol de impulsos en sus relaciones intrafamiliares, insomnio permanente y abuso de sustancias. La cuarta testigo señala que conoce bien a la víctima porque fue a una reunión de ex menores. Según le relató estuvo detenido como 20 días.

Estando en su lugar de reclusión lo taparon con una frazada, recibió golpes de pies y manos, recibió electricidad en todo su cuerpo, incluyendo testículos. Señala que presenta daño físico y psicológico. Todos los golpes le han provocado fallas en su salud y hay elementos depresivos que llaman la atención. Su calidad de vida se ha visto afectada por estos hechos, lo que ha gatillado problemas en sus relaciones personales, se afectó su autoestima y las expectativas de logro.

**Cuadragésimo Quinto:** Que a fojas 751 rola oficio emanado del Sub departamento legal del Instituto de Previsión Social de Valparaíso, en que se indica que la víctima Oscar Ibaceta Jorquera figura como víctima de prisión política y tortura en el último informe emitido por la Comisión Valech en agosto de 2011, por lo que le asiste el derecho a una pensión vitalicia de reparación conforme a la Ley N° 19.992, a partir del 01.10.2011, más el aporte único de reparación establecido por la Ley N° 20.874 para víctimas Valech, por cuyo concepto ha recibido en total a julio de 2018: \$14.566.562 (catorce millones quinientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y dos pesos).

**Cuadragésimo Sexto:** Que respecto a la contestación del Fisco de Chile que formula a partir de fojas 724, en cuanto a la excepción de reparación satisfactiva e improcedencia de las acciones alegadas, cabe desestimarlas de plano, toda vez que, si bien conforme al documento de fojas 751 el actor civil ha recibido las cantidades que allí se señalan, ello obedece a las indemnizaciones que ha establecido la Comisión Valech en su oportunidad y derivado también de las disposiciones que establece la Ley 19.123, los que han contemplado el pago de pensiones mensuales, en este caso, a partir del 1° de Octubre de 2011, las que son absolutamente compatibles con las indemnizaciones que en este proceso se pretenden, situación que la señalada ley regula en forma expresa. Que, en efecto, aquellas indemnizaciones de la ley mencionada se refieren al aspecto previsional que afectó a las víctimas derivado de las

situaciones que vivieron a partir de sus detenciones y conforme a la normativa considerada en su oportunidad. Lo que ahora se pretende es una indemnización derivada de la responsabilidad criminal de las personas que le infirieron las torturas al actor. En base a ello, se desestimará la pretensión del Fisco. Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva que se alega en subsidio, debe tenerse presente que la acción que pretende la actora tiene por objeto conseguir la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados a raíz del delito que se le infirió, y su fundamento lo encontramos en los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales que ha ratificado nuestro país, todo lo cual ha sido latamente desarrollado en la parte penal de esta sentencia y que obliga al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, íntegra y suficiente, todo ello derivado de lo que sancionan los artículos 5° inciso segundo y 6° de la Constitución Política de la República y artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. También debe considerarse que, al igual que lo que se desarrolló en el aspecto penal de esta sentencia, por tratarse en la especie de un delito de lesa humanidad, lo que ha motivado la investigación de autos y la determinación de los hechos punibles y la responsabilidad de aquellos que participaron en el ilícito, es que no es posible considerar la prescripción extintiva alegada por el Fisco, puesto que el paso del tiempo, como factor ineludible del instituto de la prescripción, no opera tratándose de delitos de lesa humanidad, como ocurre en el presente caso, dado que en el plazo regular que consagra el Código Civil, no existían las condiciones para demandar al Estado por este concepto, como tampoco en materia penal, situación que empieza a regularizarse a partir de 1990 y posteriormente a través de la actuación de los Ministros en Visita Extraordinaria, bastando además remitirse a los criterios jurisprudenciales actuales de la Corte Suprema, en

cuya virtud debe existir consonancia respecto de la apreciación de una normativa que puede desarrollarse a nivel penal como civil, y existiendo la misma razón para su rechazo en materia penal, prima la misma consideración en este aspecto civil de la discusión. En virtud de lo anterior, la petición del Fisco será rechazada.

**Cuadragésimo Séptimo:** Que en cuanto al monto del daño e indemnización reclamados, indica el Fisco que el monto pretendido resulta excesivo. Al respecto, aparece claro, en primer lugar, que no es necesario rendir prueba para acreditar a correspondiente indemnización, pues ello se incorpora en el daño moral impetrado. Sin perjuicio de ello, en segundo lugar, el actor civil ha rendido la prueba que ya se ha indicado, básicamente testimonial y documental, como asimismo al informe psicológico que rola a fojas 82 y siguientes, de forma tal que la cifra o cantidad que se ordenará cancelar al Fisco, será determinada en base al daño concreto acaecido, lo que se establecerá en base a las referidas pruebas, aplicando criterios de prudencia y equidad y las cantidades que habitualmente se otorgan por estos conceptos en casos similares, lo que en todo caso, deberá considerarse con cierta relatividad, atendido que cada caso es propio y particular. Que, en consecuencia, teniendo en consideración lo expuesto y especialmente las graves secuelas del daño producida a la víctima y actor civil, es que se determina otorgarle una indemnización por los daños morales sufridos ascendente a la suma de \$ 85.000.000.- (ochenta y cinco millones de pesos).

**Cuadragésimo Octavo:** Que, en cuanto al cobro de reajustes e intereses, ellos correrán desde que esta sentencia quede ejecutoriada, hasta su pago efectivo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y atendido lo dispuesto en los artículos 1°, 5°, 11 número 6, 14, 15 número 1 y 3, 18, 24, 28, 50, 68 y 141 inciso tercero del Código Penal; artículos 10, 42, 81, 108, 109, 110, 424, 425, 456

bis, 457, 482, 488, 500, 501, 502, 503, 504 y 533 del Código de Procedimiento Penal, **SE DECLARA:**

**A.- EN LO PENAL:**

**I.-** Que **SE ABSUELVE** a **GUILLERMO TOMÁS MORERA HIERRO**, ya individualizados en autos, de la acusación de fojas 700 de ser autor de los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos en la persona de Oscar Ibaceta Jorquera.

**II.-** Que **SE CONDENA** a **RICARDO ALEJANDRO RIESCO CORNEJO, JUAN DE DIOS REYES BASAUR, JUAN ORLANDO JORQUERA TERRAZAS, ALEJO ESPARZA MARTÍNEZ, HÉCTOR VICENTE SANTIBAÑEZ OBFREQUE, JAIME SEGUNDO LAZO PÉREZ, EDUARDO MAURICIO NÚÑEZ CONTRERAS** y **VALENTÍN EVARISTO RIQUELME VILLALOBOS**, ya individualizados en autos, como autores del delito de secuestro con grave daño en perjuicio de Oscar Ibaceta Jorquera, hechos ocurridos en Valparaíso en Febrero de 1974, a la pena de **SEIS AÑOS** de presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, cada uno de ellos; y al pago de las costas de la causa.

**III.-** Que atendido la extensión de la precitada sentencia, deberán los condenados cumplir efectivamente con la pena privativa de libertad dispuesta, lo que deberán realizar en el Centro Penitenciario correspondiente, sirviéndoles de abono en todo caso el tiempo que permanecieron privados de libertad en esta causa, tres días, desde el 24 al 26 de Abril de 2017, los condenados Lazo, Reyes, Riquelme, Riesco, Núñez y Esparza, de acuerdo a los partes de fojas 526, 531, 536, 542, 549 y 555, respectivamente y certificación de fojas 593; dos días en el caso de Santibáñez, desde el 25 al 26 de Abril de 2017, conforme a la resolución de fojas 572 y certificación de fojas 593; y tres días,



del 24 al 26 de Abril de 2017, en el caso de Jorquera, de acuerdo a las certificaciones de fojas 568 y 593.

**B.- EN LO CIVIL:**

**IV.-** Que **SE HACE LUGAR** la demanda civil interpuesta en el primer otrosí del escrito de fojas 706 por el abogado don Hernán Fernández Rojas, en representación de Oscar Ibaceta Jorquera, en contra del **FISCO DE CHILE**, debiendo este último pagarle por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral producido con ocasión del delito inferido en autos, sólo en cuanto deberá pagar la suma de \$ 85.000.000 (ochenta y cinco millones de pesos), suma que se reajustará conforme al alza del Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de esta sentencia y hasta su entero y cumplido pago, devengándose, en caso de mora, el máximo de intereses corrientes para operaciones reajustables.

**V.-** Que **NO SE CONDENA** en costas al Fisco de Chile, por estimarse que litigó con motivo plausible y no fue vencido totalmente.

Atendido la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país a raíz de la pandemia del Covid – 19, y con el objeto de resguardar la salud de los intervinientes, notifíquese personalmente esta sentencia a los sentenciados, y demás intervinientes a través de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, a quienes se les remitirá copia de la presente sentencia para cada uno de los sentenciados, con los resguardos y medidas de seguridad necesarios para ese objeto, debiendo estos manifestar respecto de la sentencia que se les notifique si apelan de ella o se reservan su derecho.

Lo anterior es sin perjuicio de que los sentenciados, previa coordinación con sus abogados y actuarios, deseen notificarse personalmente en Secretaría.

Respecto a los apoderados de las partes, notifíqueseles en Secretaría o a través de Receptor de turno, conforme a las coordinaciones con la actuaria que tramita la causa, en su

oportunidad, o a través de correos electrónicos, cuando ello sea solicitado expresamente y pueda remitírseles copias de la presente sentencia.

Dése cumplimiento en su oportunidad a lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese y **CONSÚLTESE** si no se apelare.

**Rol N° 144.132-2013**

Pronunciada por don **JAIME ARANCIBIA PINTO**, Ministro en Visita Extraordinaria de causas de Derechos Humanos de la V Región de Valparaíso.